AMICUS CURIAE
PRESENTADO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EN LOS CASOS LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS VS. PERÚ
Supervisión de casos

Audiencia pública, 02 de febrero de 2018

Elaborado por:

Jan-Michael Simon, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht

César Bazán Seminario, Informationsstelle Perú e.V.

Información de contacto:

Infostelle Peru e.V.
Postfach 1014
79010 Freiburg
Alemania

15 de enero de 2018

Introducción

1. Este *amicus curiae* se presenta de manera respetuosa a la Corte Interamericana de Derechos (en adelante la Corte o la CorteIDH) a fin de alimentar el debate jurídico y alcanzar elementos de contexto, en torno al cumplimiento de las sentencias de Fondo de los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Perú.
2. Antes de avanzar en la argumentación, los suscritos nos presentamos brevemente. Jan-Michel Simon es penalista, coordinador del departamento América Latina del Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Alemania, ha sido perito ante el sistema interamericano de derechos humanos y ha participado como miembro y asesor en diferentes misiones internacionales de lucha contra la impunidad y reforma del derecho penal y de la justicia penal en América Latina. Por otra parte, César Bazán Seminario es abogado y miembro de la organización no gubernamental alemana, Informationsstelle Perú e.V. Además ha sido profesor de derecho en la Universidad San Martín de Porres y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es ALMA Fellow en el Arnold Bergstraesser Institut y doctorando en el Instituto de Sociología de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo[1].
3. El objetivo concreto de este *amicus curiae* es demostrar que el indulto dictado por el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y su ejercicio de la potestad de gracia a favor del expresidente peruano Alberto Fujimori Fujimori (Resolución Suprema No. 281-2017-JUS, obrante en el Anexo I) se dieron en un momento de crisis y negociación política en el Perú, a la par que no se sostienen en razones jurídicas atendibles. Consecuentemente, al ser actos jurídicamente arbitrarios, el indulto y la gracia a favor del expresidente Alberto Fujimori Fujimori perjudican el cumplimiento de las sentencias de Fondo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sobre el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta, puesto evaden la efectiva sanción a los responsables.

[1] Nuestras opiniones son expresadas en este documento a título personal y no representan necesariamente la opinión institucional de las organizaciones a las que pertenecemos.

I. El escenario del indulto y del ejercicio de la potestad de gracia a favor del condenado Alberto Fujimori Fujimori: contexto de grave crisis y negociación política

4. Al momento de redactar este *amicus curiae,* el contexto político del Perú es aún crítico: entre otras, movilizaciones masivas contra el indulto, escándalos de corrupción relativos al caso Odebrecht que desprestigian a gran parte de la clase política. En los siguientes párrafos describiremos brevemente algunos elementos de la crisis política, en medio de la cual el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, dictó la jurídicamente insostenible Resolución Suprema No. 281-2017-JUS, firmada y publicada el 24 de diciembre de 2017, titulada "Conceden indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo", mediante la cual se resuelve:

> *Conceder el INDULTO Y DERECHO DE GRACIA POR RAZONES HUMANITARIAS al interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes*.

5. La actual crisis política peruana no tiene raíces recientes, sino que retoma hechos acaecidos hace más de una década. En efecto, la actual crisis se gestó mientras el ahora presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ocupó diversos cargos públicos durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo Manrique (2001-2006). Así lo expresan claramente los congresistas, que el 14 de diciembre de 2017 suscribieron el pedido de vacancia contra Kuczynski Godard por incapacidad moral (artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú) (ver Anexo II). Los fundamentos de hecho de aquella Moción de Orden del Día resaltan que en reiteradas ocasiones el actual presidente ha negado vínculos con la empresa constructora Odebrecht. Ello es especialmente grave, puesto que, tal como consta en el Plea Agreement obrante en el Anexo III de este *amicus curiae*, representantes de la propia empresa reconocieron ante la justicia estadounidense que entre el 2001 y 2016, Odebrecht

pagó USD 788 millones de sobornos en diferentes países, entre ellos Perú[2], dirigidos especialmente a políticos, funcionarios públicos y candidatos a cargos públicos[3]. Es decir, Kuczynski Godard, en calidad de funcionario público entre el 2001 y 2006, posteriormente como candidato presidencial en las elecciones del 2011 y 2016 e incluso en el ínterin como experto en temas económicos, era por lo menos "público objetivo" de los favores de Odebrecht. Pero no solo eso, sino que efectivamente él y empresas suyas recibieron pagos de Odebrecht por diversos conceptos, varios de los cuales son objeto de investigaciones fiscales. En una carta remitida por Odebrecht al Congreso del Perú, recibida el 12 de diciembre de 2017, es decir dos días antes de que se presente el pedido de vacancia y un día después de que Fujimori Fujimori solicitara el indulto, la empresa brasilera afirmó haber realizado a empresas vinculadas a Kuczynski Godard el pago de USD 782.207 (Westfield Capital) y USD 4.043.941 (First Capital), entre el 2004 y 2013[4].

6. A partir del pedido de vacancia y hasta el 21 de diciembre del 2017, la actual crisis política alcanzó uno de sus picos más elevados. El pedido de vacancia presidencial fue suscrito por un considerable número de parlamentarios y tenía opciones reales de prosperar. Por eso diferentes sectores, principalmente el gobierno y los congresistas oficialistas, realizaron acciones para convencer a la ciudadanía y a parlamentarios de rechazar la vacancia: entrevistas en medios de comunicación, conversaciones directas con parlamentarios, etc. Finalmente, luego de largos momentos de tensión y negociación política, la vacancia presidencial fue votada y, si bien consiguió mayoría (79 votos de 130), no alcanzó la mayoría calificada para prosperar, es decir 2/3 del número legal de congresistas (87 votos). El fiel de la balanza fue la abstención de diez congresistas afines de Alberto Fujimori, liderados

---

[2] Punto 20 del Anexo B, Statements of facts, del Plea Agreement, Cr. No. 16-643 (RJD), del caso Estados Unidos de América contra Odebrecht S.A. En dicho documento expresamente se sostiene: "During the relevant time period, Odebrecht, together with its co-conspirators, paid approximately $788 million in bribes in association with more tan 100 projects in twelve countries, including Angola, Argentina, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru and Venezuela"

[3] Punto 27 del Anexo B, , Statements of facts, del Plea Agreement, Cr. No. 16-643 (RJD), del caso Estados Unidos de América contra Odebrecht S.A.

[4] https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-asegura-pago-us-782-mil-empresa-ppk-asesorias-financieras-222657 (consultado el 14 de enero de 2018).

por su hijo, Kenji Fujimori, del grupo parlamentario Fuerza Popular (el partido fujimorista).

7. Tres días después de superada esa crisis, llegó la siguiente: el presidente Kuczynski emitió el 24 de diciembre de 2017, la Resolución Suprema No. 281-2017-JUS que indultó y otorgó derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Como veremos en el acápite siguiente, dicha resolución no obedece a razones jurídicamente validas, por lo que es arbitraria.
8. La concesión del indulto y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, condenado por la justicia peruana por los delitos de usurpación de funciones, homicidio y lesiones graves, peculado y corrupción, generó una gran conmoción social, que no tiene visos de disiparse: un movimiento de indignación ciudadana que suma multitudinarias marchas en diferentes ciudades del país, la renuncia de parlamentarios al partido de gobierno y de altos funcionarios del gobierno, además de la reestructuración del gabinete ministerial y enfrentamientos al interior de partidos políticos, como el partido fujimorista y el partido aprista.
9. Para concluir esta sección queremos poner énfasis en la secuencia de los hechos. En primer lugar, Alberto Fujimori Fujimori solicita el indulto humanitario y la gracia presidencial. En segundo lugar, el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski es severamente cuestionado por su relación con la empresa Odebrecht y puesto al borde de la vacancia presidencial, con lo cual se abre un intenso capítulo de negociación y crisis política. En tercer lugar, el ala afín a Alberto Fujimori, liderada por el hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, se abstiene de votar a favor de la vacancia presidencial, con lo cual esa iniciativa fracasa. En cuarto lugar, tres días después Kuczynski Godard otorga un indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori, que son calificados como humanitarios, pero como veremos en el acápite siguiente no tienen sustento jurídico alguno. Además, debemos resaltar que antes de que la amenaza del caso Odebrecht le apremie, el presidente Kuczynski negó en reiteradas ocasiones que otorgaría el referido indulto (por ejemplo, en junio de 2016[5] o en

[5] http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ppk-no-voy-indultar-alberto-fujimori-n234572 (consultado el 14 de enero de 2018).

julio de 2016[6]). Sin embargo, en la medida que dicha amenaza avanzó y llegó incluso hasta el límite de poner en riesgo su permanencia en el cargo, su posición respecto del indulto varió.

II. La arbitrariedad del indulto y derecho de gracia a favor del condenado Alberto Fujimori Fujimori

10. Las sentencias de Fondo tanto del caso Barrios Altos (14 de marzo de 2001), como del caso La Cantuta (29 de noviembre de 2006) son claras al determinar que debe haber una sanción efectiva a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. Para verificar este dato se puede revisar el punto resolutivo No. 5 de la sentencia de Fondo del caso Barrios Altos y punto resolutivo No. 9 de la mencionada sentencia del caso La Cantuta.
11. El señor Alberto Fujimori Fujimori fue encontrado responsable penal en los casos Barrios Altos y La Cantuta por la justicia peruana, que en primera instancia dictó la sentencia en su contra el 07 de abril de 2009, consignada en el Expediente No. A.V. 19-2001. Los delitos cometidos por Fujimori Fujimori fueron calificados como de lesa humanidad, tal como se puede ver en los fundamentos jurídicos 710 al 717 de la referida sentencia nacional. Esa decisión judicial fue confirmada el 30 de diciembre del 2009 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú. De no ser por el indulto y derecho de gracia, el condenado Fujimori hubiera cumplido su pena en el año 2032 y cumplido efectivamente con la sanción impuesta por el Estado peruano.
12. En los puntos siguientes demostraremos que el indulto y el derecho de gracia fueron arbitrarios, pues no se sustentan dentro de limitaciones jurídicamente válidas. En lugar de atender a las limitaciones de derecho, el indulto atiende únicamente al resultado de una negociación política, descrita *supra* en el contexto político actual peruano. En ese sentido, en vista a que el contexto político descrito *supra* indica claramente que el indulto no obedeció a razones humanitarias sino a un cálculo político de reciprocidad, no profundizamos problemas jurídicos relativos

[6] http://rpp.pe/politica/gobierno/ppk-fujimori-tiene-derecho-de-pedir-el-indulto-pero-yo-no-lo-firmare-noticia-981939 (consultado el 14 de enero de 2018).

al indulto humanitario (como por ejemplo su compatibilidad con compromisos internacionales del Estado) puesto que estamos convencidos que no estamos frente a un acto jurídicamente válido sino arbitrario que viola limitaciones jurídicas básicas, como es el derecho al debido proceso.

13. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, la Convención) contiene el derecho a las garantías judiciales, también conocido como debido proceso. Este derecho, como es lógico, no solo se aplica a procesos judiciales, sino también a procedimientos de otra índole, como lo declaró la CorteIDH en el caso Tribunal Constitucional vs. Perú[7]. De acuerdo a esta jurisprudencia, en sede administrativa también es exigible el derecho al debido proceso[8], más aún si el Estado va a tomar decisiones que afecten el cumplimiento de sentencias de la CorteIDH, como es el caso de la Resolución No. 281-2017-JUS, que indultó al condenado Fujimori Fujimori.
14. Los derechos que de acuerdo al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos forman parte del debido proceso y que han sido vulnerados por el Estado del Perú son el derecho a la debida motivación, el derecho a la publicidad y transparencia del proceso y el deber de imparcialidad.

a. Las violaciones al derecho al debido proceso en la concesión del indulto y el ejercicio de la potestad de gracia presidencial: problemas de debida motivación, de acuerdo al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos

15. La Resolución Suprema No. 281-2017-JUS que otorga el indulto y derecho de gracia está indebidamente motivada en varios puntos. En primer lugar, era de esperarse que el gobierno peruano fundamente jurídicamente su resolución suprema respondiendo cómo el indulto no afecta la sanción efectiva al responsable de los crímenes de lesa humanidad referidos en las sentencias de la CorteIDH por el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta, en las cuales hay sendas disposiciones contra el Estado a fin de que se sancione debidamente los responsables. Este es un problema jurídico relevante para la concesión del indulto que no ha sido si quiera mencionado

[7] Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones, Costas, del 31 de enero de 2001, fundamento jurídico 69 y siguientes.
[8] Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, del 31 de enero de 2001, fundamento jurídico 71.

en la Resolución Suprema No. 281-2017-JUS, por lo cual estamos ante un caso de falta de motivación.

16. En segundo lugar, la resolución suprema hace un listado de los hallazgos médicos consignados en el Acta de la Junta Médica Penitenciaria, de fecha 17 de diciembre de 2017, ampliada con fecha 19 de diciembre siguiente. Sin embargo, el gobierno del Estado peruano no fundamenta cómo dichas enfermedades son calificadas de: "enfermedad no terminal grave, en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable" y por lo tanto pasibles para la concesión de un indulto por razones humanitarias, según las normas internas Decreto Supremo No. 004-2007-JUS, modificado por Decreto Supremo No. 008-2010-JUS y la Resolución Ministerial No. 162-2010-JUS.
17. Además, en tercer lugar, no hay motivación suficiente respecto del segundo supuesto conjuntivo del indulto humanitario: "las condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo la vida, salud e integridad del interno". En los fundamentos de la resolución del indulto y derecho de gracia, solo se indica que el establecimiento penitenciario Barbadillo cuenta con servicios básicos y no con servicios necesarios para la atención médica de Fujimori Fujimori. ¿Está sugiriendo, acaso el Estado del Perú, que la única manera de asegurar condiciones carcelarias óptimas al señor Fujimori Fujimori era contar con un hospital al interior de la base policial, donde se ubica el Centro Penitenciario Barbadillo? La fundamentación planteada por el Estado no es motivación suficiente para asegurar que las condiciones carcelarias colocarían en grave riesgo la vida, salud e integridad del condenado Fujimori Fujimori.
18. En cuarto lugar, la Resolución Suprema No. 281-2017-JUS, al igual que omite cualquier tipo de fundamentación respecto de las sentencias de la CorteIDH, lo hace también respecto de normas de derecho interno que prohíben el indulto en determinados casos. Tal es el caso de la Ley 28760 (ver Anexo IV), que en su artículo 2 prohíbe el indulto y derecho de gracia a favor de condenados por secuestro.

b. Las violaciones al derecho al debido proceso en la concesión del indulto y el ejercicio de la potestad de gracia presidencial: la falta de publicidad y transparencia, de acuerdo al artículo 8.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos

19. Ahora bien, no solo hay problemas de debido proceso que se manifiestan en la Resolución Suprema No. 281-2017-JUS, sino también a lo largo del procedimiento, y que perjudican la ejecución de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta de la CorteIDH. El procedimiento de la concesión del indulto y del ejercicio de la potestad de la gracia presidencial ha sido manejado como información secreta. Incluso funcionarios y organismos propios del Estado peruano no han podido tener acceso al expediente que sustentó el indulto y derecho de gracia, tal como lo indicó la Defensoría del Pueblo en su Pronunciamiento No. 01/DP/2018 del 10 de enero de 2018, mediante el cual reitera el pedido que le hiciera al presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales el 27 de diciembre de 2017 (ver Anexo V). Días después del pronunciamiento de la Defensoría, la prensa indicó que la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había negado definitivamente el acceso al expediente[9]. Esta opacidad en torno al indulto y derecho de gracia vulnera la publicidad del procedimiento y, además, el derecho de acceso a la información pública de acuerdo a los artículos 8 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo que el Estado del Perú dificulta el ejercicio del derecho de defensa de las víctimas y la capacidad de la CorteIDH de decidir teniendo a la vista todos los elementos de prueba.

c. Las violaciones al derecho al debido proceso en la concesión del indulto y el ejercicio de la potestad de gracia presidencial: la violación al deber de imparcialidad, de acuerdo al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos

20. Por último, las violaciones al debido proceso llegan también a vulnerar al deber de imparcialidad. Más allá del contexto de crisis y negociación política en el marco del

[9] http://larepublica.pe/politica/1170292-minjus-niega-a-la-defensoria-acceso-al-expediente-del-indulto-a-fujimori (Consulta 14 de enero de 2018).

procedimiento de vacancia presidencial, la imparcialidad puede ser cuestionada a partir de varios hechos. El primero es la inusitada celeridad con que se otorgó el indulto y derecho de gracia al condenado Fujimori Fujimori, lo que representa un trato preferencial a favor de él en comparación con otros condenados. De acuerdo, a la resolución suprema cuestionada, Alberto Fujimori presentó su solicitud el 11 de diciembre de 2017 y fue resuelta el 24 de diciembre siguiente. Es decir, en catorce días se llevó a cabo todo el procedimiento. Este es un trato discriminatorio respecto de los demás indultados del 24 de diciembre de 2017 y a favor del condenado Fujimori Fujimori, puesto que no se explicitan las razones para un procedimiento tan célere. Si comparamos el caso del indultado Fujimori Fujimori con la duración del procedimiento de otras personas según las demás resoluciones de indultos y/o derechos de gracia humanitarios publicadas también el 24 de diciembre de 2017, esto queda más claro. El promedio general (excluyendo el caso del condenado señor Fujimori Fujimori) se encuentra en 89 días de duración del procedimiento. Es decir, el procedimiento para el condenado Fujimori Fujimori fue tan célere, que duró alrededor un sexto (1/6) del promedio general (ver Anexo VI). Esa celeridad a favor de Fujimori Fujimori no se explica por razones jurídicas y expresa favoritismo y parcialidad en este caso.

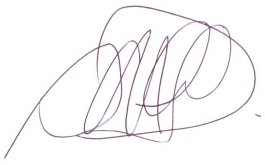
21. En segundo lugar, la imparcialidad del indulto y derecho de gracia, que afecta el cumplimiento de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta, es también cuestionada por la composición de la Junta Médica Penitenciaria, que debía emitir una opinión técnica sobre la salud de Alberto Fujimori Fujimori. En vista a que el Estado del Perú trata como secreta la información sobre el indulto, recurrimos en este punto a fuentes públicas. De acuerdo a medios de prensa[10], la Junta Médica estuvo conformada por tres miembros, uno de los cuales era Juan Postigo Díaz, quien era además médico personal del ahora indultado. Es decir, uno de los integrantes de la Junta Médica, que debía ser imparcial, tenía un vínculo previo y cercano con el condenado, respecto del cual debía emitir un diagnóstico técnico.

[10] http://larepublica.pe/politica/1161652-alberto-fujimori-revelan-que-su-doctor-integra-la-junta-medica-que-pidio-el-indulto (consultado 15 de enero de 2018).

III. Conclusiones

22. Es claro que las vulneraciones al debido proceso aquí reseñadas, expresan que el indulto y derecho de gracia contenidos en la Resolución No. 281-2017-JUS, fueron dictados de manera ilegal, sin atender a las limitaciones jurídicas básicas y por lo tanto son arbitrarios. En efecto, desde una perspectiva basada en el derecho al debido proceso, el procedimiento vulneró el derecho a la motivación (artículo 8.1 de la Convención), el derecho de publicidad (artículo 8.5 de la Convención) y el deber de imparcialidad (artículo 8.1 de la Convención), además de vulnerar el derecho a acceso a la información pública (artículo 13 de la Convención). En ese sentido, para los fines del presente *amicus curiae*, no es relevante debatir si estamos frente a un indulto humanitario o no, sino que simplemente estamos frente a un acto arbitrario, que carece de respetar a limitaciones jurídicas básicas y que se explica por elementos políticos del reciente contexto de crisis y negociación política.

23. En ese sentido, al no respetar limitaciones jurídicas básicas y constatar que el indulto y derecho de gracia perjudican la ejecución de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, debemos mirar el contexto político. Entre los principales hechos de ese contexto, advertimos dos, que están sumamente vinculados. El primero, es el procedimiento de vacancia presidencial que puso en jaque al gobierno del presidente Kuczynski Godard y cuya cabeza fue salvada por la abstención de una decena de congresistas fujimoristas. Y, el segundo, el avance de las investigaciones periodísticas y fiscales sobre los casos de corrupción en Perú cometidos por funcionarios de la empresa Odebrecht, las cuales involucran al presidente Kuczynski Godard. Esos elementos, junto con otros del contexto político, constituirían las razones políticas que llevaron a la emisión de un indulto y derecho de gracia abiertamente arbitrario, ajeno a prácticas democráticas y del Estado de Derecho.



Jan-Michel Simon

César Bazán Seminario

ANEXO 1

Que, el 07 de setiembre de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, recibió la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias del interno JULIO CESAR CUEVA HUALTIBAMBA, quien se encuentra privado de libertad en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro;

Que, durante la tramitación de la solicitud se han recopilado diversos documentos de carácter médico que evidencian su estado de salud de los últimos meses;

Que, mediante el Informe Médico de fecha 21 de septiembre de 2017, emitido por el Área de Salud del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, suscrito por el médico Víctor Enrique Ríos Palacios, se diagnostica que el referido interno padece de: «diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial descompensada, enfermedad renal crónica terminal y síndrome anémico»;

Que, el Protocolo Médico, de fecha 21 de septiembre de 2017, emitido por la Subdirección de Salud del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro y suscrito por el médico Víctor Enrique Ríos Palacios, señala que la clasificación de la enfermedad es «crónica», cuya causa de la enfermedad son los «desequilibrios metabólicos y déficit de la función renal»;

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria - Anexo 03, de fecha 21 de septiembre de 2017, emitida por el Área de Salud del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro y suscrita por los médicos Víctor Enrique Ríos Palacios, Juan Tsuchida Honda y Julia Ruíz Camac, señala como diagnóstico: «diabetes mellitus insulino dependiente, hipertensión arterial descompensada, enfermedad renal crónica terminal y síndrome anémico», con pronóstico «reservado» e indica como consecuencia «de no llevar un tratamiento medicamentoso y de hemodiálisis de forma continua y adecuada provocaría grave daño en la salud del paciente pudiendo llegar a la muerte»;

Que, de lo glosado en los precitados documentos, se establece que el interno JULIO CESAR CUEVA HUALTIBAMBA, se encuentra comprendido en el supuesto señalado en el literal a) del numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales, pues se trata de una persona que padece de una enfermedad terminal;

Que, en el presente caso, la gravedad de la enfermedad se configura como un argumento en el que se justifica la extinción de la acción penal que conlleva la gracia, sin sacrificar los fines de la pena constitucionalmente reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional de persona con enfermedad terminal, lo que determina que la continuidad de la persecución penal pierda todo sentido jurídico y social;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, el literal a) del artículo 31 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conceder el DERECHO DE GRACIA POR RAZONES HUMANITARIAS al interno del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, JULIO CESAR CUEVA HUALTIBAMBA.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1600540-1

Conceden indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo

**RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 281-2017-JUS**

Lima, 24 de diciembre de 2017

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00235-2017-JUS/CGP de fecha 24 de diciembre de 2017, con recomendación favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la Constitución Política del Perú consagran el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, como derechos fundamentales de la persona humana;

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú facultan al Presidente de la República a dictar resoluciones, conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

Que, el indulto es la potestad del Presidente de la República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo otorgarse por razones humanitarias;

Que, el literal b) del numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales y el literal b) del artículo 31 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, disponen que se recomendará el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias, entre otros, cuando el interno padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentre en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad;

Que, el 11 de diciembre de 2017, el interno ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI solicitó gracias presidenciales por razones humanitarias; asimismo, mediante el Oficio Nº 058-2017-INPE/18-239-salud, de fecha 18 de diciembre de 2017, el Director del Establecimiento Penitenciario Barbadillo remitió dicha solicitud a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, para el trámite correspondiente;

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria, de fecha 17 de diciembre de 2017, ampliada con fecha 19 de diciembre de 2017, señala como diagnóstico del interno: fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas a repetición que han merecido atención de emergencia y evacuación, cardiopatía hipertensiva de grado leve – moderado, insuficiencia mitral, hipotiroidismo sub clínico, cáncer de lengua tipo carcinoma epidermoide medianamente invasivo intervenido quirúrgicamente hasta en seis oportunidades con riesgo de recidiva, trastorno depresivo en tratamiento farmacológico, hipertrofia benigna prostática grado II, insuficiencia periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2 – L3; por lo que, por el estado actual del paciente, dicha Junta Médica recomienda el indulto por razones humanitarias;

Que, asimismo, el Informe Social Nº 01-2017-INPE/18-239-S.S., de fecha 04 de diciembre de 2017, indica que el interno se encuentra delicado de salud, con diagnóstico médico de un cáncer de alto riesgo en la cavidad bucal; asimismo, refiere que dicho estado le impide el desarrollo normal de sus actividades cotidianas, su dolencia le limita la fluidez de una pronunciación correcta. Refiere también que de modo continuo recae en un estado de postración por depresión de la que se recupera de forma momentánea,

por la atención médica y psiquiátrica que recibe; por lo que, el mencionado informe opina favorablemente a la solicitud del interno, debido a razones humanitarias;

Que, según el Informe de Condiciones Carcelarias del Establecimiento Penitenciario Barbadillo, de fecha 12 de diciembre de 2017, este cuenta con los servicios básicos; sin embargo, por la edad avanzada del interno y las diversas dolencias que presenta, las condiciones del establecimiento penitenciario no cuenta con los servicios necesarios para la atención médica, por lo que en reiteradas oportunidades debe ser evacuado a un centro de salud que cuente con las condiciones para poder afrontar dicha problemática;

Que, de lo glosado en los precitados documentos, se establece que el interno ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, se encuentra comprendido en el supuesto señalado en el literal b) del numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales, pues se trata de una persona que padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y que además las condiciones carcelarias en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, colocan en grave riesgo su vida, salud e integridad;

Que, en el presente caso, la gravedad de la enfermedad se configura como un argumento en el que se justifica la culminación de la ejecución penal que conlleva la gracia, sin sacrificar los fines de la pena constitucionalmente reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional de una persona con enfermedad no terminal grave, lo que determina que la continuidad de la persecución penal pierda sentido, sin que ello afecte el ejercicio de las demás acciones orientadas a la restitución del perjuicio ocasionado;

Que, asimismo, la Comisión de Gracias Presidenciales, ha determinado en el Informe del Expediente Nº 00235-2017-JUS/CGP que, siendo que la exigibilidad de la ejecución completa de las penas impuestas al solicitante Alberto Fujimori Fujimori, a sus 79 años de edad y dada la condición de salud que muestra deterioro y vulnerabilidad, el citado solicitante no significaría un peligro para la sociedad y, por el contrario, dicha exigencia podría representar un daño irreparable a su derecho fundamental a la integridad física o, incluso, a su vida, por lo que, debe primar el principio y derecho a la dignidad humana, sin que ello signifique una aceptación o validación de su accionar o una eliminación de la reprochabilidad moral y social de los delitos; en ese sentido, la citada Comisión recomienda la concesión del indulto y derecho de gracia por razones humanitarias; que hace que esta persona no está en capacidad de recibir sanción

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8) y 21) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, el literal b) del artículo 31 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conceder el INDULTO Y DERECHO DE GRACIA POR RAZONES HUMANITARIAS al interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1600540-2

Conceden indulto por razones humanitarias a internos del Establecimiento Penitenciario de Tumbes

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 282-2017-JUS

Lima, 24 de diciembre de 2017

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00130-2017-JUS/CGP de fecha 18 de diciembre de 2017, con recomendación favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado;

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la Constitución Política del Perú consagran el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, como derechos fundamentales de la persona humana;

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú facultan al Presidente de la República a dictar resoluciones, conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

Que, el indulto es la potestad del Presidente de la República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo otorgarse por razones humanitarias;

Que, en dicho contexto, el literal a) del inciso 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales y el literal a) del artículo 31 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, disponen que se recomendará el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias cuando el interno padece de una enfermedad terminal;

Que, el 26 de setiembre de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales recibió la solicitud de indulto por razones humanitarias del interno FRANKLIN EDGARDO LUNA ATOCHE, quien se encuentra privado de libertad en el Establecimiento Penitenciario de Tumbes;

Que, durante la tramitación de la solicitud se han recopilado diversos documentos de carácter médico que evidencian su estado de salud de los últimos meses;

Que, mediante el Informe Médico, de fecha 06 de octubre de 2017, emitido por el área de salud del Establecimiento Penitenciario de Tumbes y suscrito por los médicos David Gonzalo Ramirez Estela y Stalyn A. Guerrero Ramírez, se concluye que el referido interno padece de enfermedad renal crónica terminal (ERCT);

Que, el Protocolo Médico, de fecha 06 de octubre de 2017, emitido por el Área de Salud del Establecimiento Penitenciario de Tumbes, suscrito por el médico David Gonzalo Ramírez Estela, determina que la enfermedad que padece el interno tiene la clasificación de crónica y terminal;

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria, de fecha 06 de octubre de 2017, emitido por el Área de Salud del Establecimiento Penitenciario de Tumbes y suscrita por los médicos David Gonzalo Ramírez Estela y Stalyn A. Guerrero, señala como diagnóstico definitivo: enfermedad renal crónica terminal (ERCT), hemorragia digestiva alta, úlcera péptica e hipertensión arterial, con pronóstico desfavorable;

Que, de lo glosado en los precitados documentos, se establece que el interno FRANKLIN EDGARDO LUNA ATOCHE, se encuentra comprendido en el supuesto señalado en el literal a) del inciso 6.4 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales,

ANEXO 2

MOCION DE ORDEN DEL DIA

Los congresistas de la República que suscriben, en uso de sus facultades señaladas en el artículo 66, 68 y 89-A del Reglamento del Congreso de la República, propone al Congreso de la República la siguiente Moción del Orden del Día.

Considerando:

Que, de conformidad con el inciso d) del artículo 68 del Reglamento del Congreso de la Republica, señala que las mociones de Orden del Día son propuestas mediante los cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país.

Que, de conformidad al artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la República, el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú se formula mediante Moción de Orden del Día. De conformidad al procedimiento señalado en el Reglamento del Congreso de la Republica, presentamos el pedido de vacancia del ciudadano Pedro Pablo Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República por los siguientes fundamentos de hecho y derecho.

Fundamentos de Hecho:

1. El 23 de octubre de 2017, Pedro Pablo Kuczynski envió una carta a la Comisión Investigadora Multipartidaria "Lava Jato" del Congreso, en la que negó haber recibido dinero en alguna de sus campañas presidenciales por parte de Odebrecht. También descartó que alguna asociación civil en la que tuvo participación haya sido beneficiada por entregas de dinero de las constructoras.

2. El 15 de noviembre de 2017, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente Constitucional de la República, en un mensaje al país ha señalado que no había recibido aportes de Odebrecht. Textualmente señaló que*: "En el trascendido se dice que yo habría sido una "piedra en el zapato" como ministro de Economía contra los proyectos que promovía la empresa. Por ello se afirma que después de haber sido ministro se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa"*, afirmó. El presidente de la República también calificó como "falsa" la afirmación que hiciera altos ejecutivos de Odebrecht ante fiscales peruanos, en la cual indica que PPK fue contratado como consultor financiero luego que dejara el cargo de Ministro de Economía. Sin embargo, las afirmaciones hechas por el Presidente de la República, ha sido desvirtuadas por el señor Mauricio Cruz Lopes, representante de la empresa Odebrecht, mediante un documento remitido a la Comisión "Lava Jato".

3. Con fecha 30 de noviembre del 2017, mediante un Oficio N 655-2017-2018/CIM.CR, la presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria

"Lava Jato", solicitó al señor Mauricio Cruz Lopes, representante de la empresa Odebrecht para que informe si el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard como persona natural o integrante de una persona jurídica, de manera directa o indirecta, ha estado vinculado o ha prestado servicios de asesoría, consultoría o cualquier otra modalidad contractual profesional o laboral con las empresas del consorcio o Grupo Empresarial Odebrecht que operan o hayan operado en el Perú o en otro país del mundo. Asimismo, solicitó que le precise si cualquier empresa del consorcio o Grupo Empresarial Odebrecht que opera o haya operado en el Perú o en otro país del mundo, ha mantenido vínculo comercial con las empresas First Capital Partners, The Latin America Enterprise Fund Managers, South Bayshore Properties, Wesfield Financial Advisor, detallando la relación comercial y transacciones sostenidas. Al respecto, el 12 de diciembre de 2017, mediante Carta OLI-LN-008/2017, el señor Mauricio Cruz Lopes, representante de la empresa Odebrecht remitió a la Comisión Investigadora Multipartidaria "Lava Jato" una información señalando que en el año 2004, 2005, 2006 y 2007, la Concesionaria Trasvase Olmos depositó a su proveedor Westfield Capital Limited Inc., la suma de 64,637.68 (sesenta y cuatro mil seiscientos treinta siete dólares americanos), así como depósitos de la Concesionaria IIRSA Norte Tramo 2 y 3 a Westfield Capital Limited por la suma de 717,570.00 (setecientos diecisiete mil quinientos setenta dólares americanos) haciendo un total de 782, 202.68 (setecientos ochenta y dos mil doscientos dos y/68 dólares americanos). Asimismo, hay depósitos de la Concesionaria H2Olmos, en los años 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013, al proveedor First Capital Inversiones y Asesoría Li por la suma de 4,043,941.00 (cuatro millones cuarenta y tres mil novecientos cuarenta un dólares americanos), la empresa Westfield Capital Limited es un empresa presidida por el actual Presidente de la Repùblica y la empresa First Capital está vinculada al actual Presidente de la República.

4. Los documentos enviados a la Comisión Investigadora Multipartidaria "Lava Jato" por el señor Mauricio Cruz Lopes, ponen en evidencia la falta de verdad en las declaraciones del Presidente de la República, que constituyen una incapacidad moral de conformidad al marco constitucional. Los hechos constituyen una situación delicada y que desencadenan en una consecuencia jurídica de "vacancia por incapacidad moral" que no requiere mayor controversia o dilucidación al respecto. Las afirmaciones del Presidente de la República como *"...yo nunca no he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vinculo profesional con Odebrecht..."*, escrito el 14 de noviembre de 2017. Posteriormente en el Oficio N 005-2017/DP, dirigido a la señora Rosa Bartra Barriga, Presidenta de la Comisión *"Lava Jato"* ha señalado que *"puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas, que públicamente vienen siendo vinculadas al caso Lava Jato"*. Aseveraciones que hoy han sido desvirtuadas públicamente con el documento enviado por el representante de la empresa Odebrecht, Mauricio Cruz Lopes.

5. Otro hecho importante que es necesario e indispensable señalar, que el actual Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, fue Ministro de Economía y Finanzas entre los años 2001-2002 y 2004-2005, así como fue Presidente del Consejo de Ministros entre los años 2005-2006, fecha en que fue proveedor de la Concesionaria Trasvase Olmos a través de la Empresa Westfield Limited Inc. y recibía pagos por servicios de la empresa Odebrecht. Al respecto, el artículo 126 de la Constitución señala con precisión que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones. Hechos de tal magnitud lo descalifica para mantenerse al frente de tan delicado y honroso cargo y representar a la Nación. Lo más grave del hecho es haberle mentido reiteradas veces a los más de treinta millones de peruanos, que configura una incapacidad moral indiscutible.

Fundamentos de Derecho:

1. El artículo 110 de la Constitución Política del Perú establece que el Presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación. Asimismo, el inciso 3, del artículo 118, establece su condición de Jefe de Gobierno, al establecer que es atribución del presidente de la República dirigir la Política General del Gobierno. Como tal, faltar a la verdad y estar vinculado a presuntos actos de corrupción revisten una delicada gravedad.

2. La incapacidad moral como causal de vacancia presidencial es una figura jurídica en el sistema constitucional peruano, conforme lo establece la Constitución de 1993, actualmente vigente, regula la figura jurídica de la vacancia en términos idénticos a la Constitución de 1979, pues incluye los mismos supuestos ya previstos tanto por dicha norma fundamental como la Constitución anterior de 1933. La Constitución Política del Perú de 1993, textualmente, señala:

   "Artículo 113.- La Presidencia de la República vaca por:

   (...)

   2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

   (...)"

3. La incapacidad moral se utiliza para sancionar aquellas conductas reprochables que difícilmente pueden constituir en una infracción constitucional. Es decir, si una infracción a la Constitución es cualquier vulneración de sus postulados expresos o implícitos, así como de los principios que enarbola la Constitución, existirán algunas otras conductas que pueden quedar fuera de dicha delimitación, como las expresiones faltantes a la verdad del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard. Faltar a la verdad es una conducta contraria a la majestad del cargo presidencial.

4. La incapacidad moral es aplicable a aquellas conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial, más aun cuando el Presidente de la República, es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y personifica a la Nación; por lo tanto, hace imposible que se mantenga en el cargo después de tales conductas.

5. La vacancia por incapacidad moral, es una atribución del Congreso que se hace efectivo con el retiro de confianza parlamentaria de la figura presidencial, por una causal de conducta reprochable, que limita al Presidente de la República ejercer la alta magistratura de la Nación. La vacancia presidencial es una figura constitucional que permite acortar el mandato dentro del ámbito del modelo presidencial y la salida constitucional dentro del Estado de Derecho.

6. La vacancia por incapacidad moral es aquella conducta reprochable que sin duda revisten gravedad, pero que escapan de los alcances de la infracción constitucional y del juicio político.

Por lo expuesto,

El Congreso de la República

Acuerda:

Artículo 1°.- Declaración de Permanente Incapacidad Moral

Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano **Pedro Pablo Kuczynski Godard**, según lo establecido por el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución Política del Perú.

Artículo 2°.- Declaración de vacancia del Presidente de la República

Declárase la vacancia de la Presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115° de la Constitución Política del Perú.

Por tanto:

Cúmplase y publíquese

Dado en el Palacio del Congreso en Lima a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

ANEXO 3

ORIGINAL

WMP/DK:JN/AS
F. #2016R00709

UNITED STATES DISTRICT COURT
EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
----------X

UNITED STATES OF AMERICA

- against -

ODEBRECHT S.A.,

Defendant.

PLEA AGREEMENT

Cr. No. 16-643 (RJD)

----------X

The United States of America, by and through the Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section (the "Fraud Section"), and the United States Attorney's Office for the Eastern District of New York (the "EDNY"), and Odebrecht S.A. (the "Defendant"), by and through its undersigned attorneys, and through its authorized representative, pursuant to authority described herein, hereby submit and enter into this plea agreement (the "Agreement"), pursuant to Rule 11(c)(1)(C) of the Federal Rules of Criminal Procedure. The terms and conditions of this Agreement are as follows:

TERM OF THE DEFENDANT'S OBLIGATIONS UNDER THE AGREEMENT

1. Except as otherwise provided in Paragraph 11 below in connection with the Defendant's cooperation obligations, the Defendant's obligations under the Agreement shall last and be effective for a period beginning on the date on which the Information is filed and ending three years from the later of the date on which the Information is filed or the date on which the independent compliance monitor (the "Monitor") is retained by the Defendant, as described in Paragraphs 30 to 32 below (the "Term"). The Defendant agrees, however, that, in the event the Fraud Section and EDNY determine, in their sole discretion, that the Defendant has failed specifically to perform or to fulfill completely each of the Defendant's obligations under this

Agreement, an extension or extensions of the Term may be imposed by the Fraud Section and EDNY, in their sole discretion, for up to a total additional time period of one year, without prejudice to the Fraud Section and EDNY's right to proceed as provided in Paragraphs 30 to 32 below. Any extension of the Term extends all terms of this Agreement, including the terms of the monitorship in Attachment D, for an equivalent period. Conversely, in the event the Fraud Section and EDNY find, in their sole discretion, that there exists a change in circumstances sufficient to eliminate the need for the monitorship in Attachment D, and that the other provisions of this Agreement have been satisfied, the Term may be terminated early, except for the Defendant's cooperation obligations described in Paragraph 11 below.

RELEVANT CONSIDERATIONS

2. The Fraud Section and EDNY enter into this Agreement based on the individual facts and circumstances presented by this case, including:

a. the Defendant did not voluntarily disclose to the Fraud Section and EDNY the conduct described in the Statement of Facts, attached hereto as Attachment B (the "Statement of Facts");

b. the Defendant received full cooperation credit for its cooperation with the Fraud Section and EDNY's investigation by, among other things, (i) gathering evidence and performing forensic data collections in multiple jurisdictions; (ii) producing documents, including translations, to the Fraud Section and EDNY from foreign countries in ways that did not implicate foreign data privacy laws; (iii) collecting, analyzing, organizing, and producing voluminous evidence and information; (iv) providing non-privileged facts relating to projects obtained or retained through bribery; (v) providing non-privileged facts relating to individuals and companies involved in various illegal schemes; and (vi) facilitating and encouraging the

cooperation and voluntary disclosure of information and documents by current and former company personnel;

c. the Defendant engaged in extensive remedial measures, including (i) terminating the employment of 51 individuals who participated in the misconduct described in the Statement of Facts, (ii) disciplining an additional 26 individuals who were engaged in the misconduct, including suspensions of up to a year and a half, significant financial penalties, and demotion to non-managerial, non-supervisory, non-decision making roles, for each of the 26 individuals, (iii) requiring individualized anti-corruption compliance and business ethics training for each of the 26 individuals, and requiring each to be subject to heightened oversight and day-to-day supervision, including ensuring that the independent compliance monitor described in Attachment D has full access and authority to evaluate the business activities and ongoing compliance of those individuals, (iv) creating a Chief Compliance Officer position that reports directly to the Audit Committee of the Board of Directors, (v) adopting heightened controls and anti-corruption compliance protocols, including hospitality and gift approval procedures, (vi) incorporating adherence to compliance principles into employee performance evaluation and compensation, (vii) increasing the number of employees dedicated to compliance by 50 percent; and (viii) more than doubling the resources devoted to compliance in 2016 and more than tripling the budget for 2017;

d. although the Defendant had inadequate anti-corruption controls and little or no anti-corruption compliance program during the period of the conduct described in the Statement of Facts, the Defendant has been enhancing and has committed to continue to enhance its anti-corruption compliance program and internal controls, including ensuring that its compliance program satisfies the minimum elements set forth in Attachment C to this Agreement;

e. because the Defendant has not yet fully implemented or tested its compliance program, the Defendant has agreed to the imposition of an independent compliance monitor to reduce the risk of recurrence of misconduct (as set forth in Paragraphs 30 to 32 below);

f. the nature and seriousness of the offense including a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to a large number of high-level government officials for a 15 year span carried out by high-level executives and directors at the Company;

g. the Defendant has no prior criminal history;

h. the Defendant has agreed to continue to cooperate with the Fraud Section and EDNY in any ongoing investigation of the conduct of the Defendant and its officers, directors, employees, agents, business partners, and consultants relating to violations of the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ("FCPA"); and

i. accordingly, after considering (a) through (h) above, the Defendant received an aggregate discount of 25 percent off of the bottom of the applicable U.S. Sentencing Guidelines fine range.

THE DEFENDANT'S AGREEMENT

3. Pursuant to Fed. R. Crim. P. 11(c)(1)(C), the Defendant agrees to knowingly waive indictment and its right to challenge venue in the United States District Court for the Eastern District of New York, and to plead guilty to a one-count criminal Information charging the Defendant with conspiracy to commit offenses against the United States in violation of Title 18, United States Code, Section 371, that is, to violate the anti-bribery provisions of the FCPA, as amended, Title 15, United States Code, Sections 78dd-3 (the "Information"). The Defendant further agrees to persist in that plea through sentencing.

4. The Defendant understands that, to be guilty of this offense, the following essential elements of the offense must be satisfied:

a. An unlawful agreement between two or more individuals to violate the FCPA existed; specifically, as a person or entity, while in the territory of the United States, to make use of the mails and means and instrumentalities of interstate commerce corruptly in furtherance of an offer, payment, promise to pay, and authorization of the payment of any money, offer, gift, promise to give, and authorization of the giving of anything of value, to a foreign official, and to a person, while knowing that all or a portion of such money and thing of value would be and had been offered, given, and promised to a foreign official, for purposes of: (i) influencing acts and decisions of such foreign official in his or her official capacity; (ii) inducing such foreign official to do and omit to do acts in violation of the lawful duty of such official; (iii) securing an improper advantage; and (iv) inducing such foreign official to use his or her influence with a foreign government and agencies and instrumentalities thereof to affect and influence acts and decisions of such government and agencies and instrumentalities, in order to assist the Defendant and its co-conspirators in obtaining and retaining business for and with, and directing business to, any person;

b. The Defendant knowingly and willfully joined that conspiracy;

c. One of the members of the conspiracy knowingly committed or caused to be committed, in the Eastern District of New York or elsewhere in the United States, at least one of the overt acts charged in the Information; and

d. The overt acts were committed to further some objective of the conspiracy.

5. The Defendant understands and agrees that this Agreement is between the Fraud Section, EDNY and the Defendant and does not bind any other division or section of the

Department of Justice or any other federal, state, local, or foreign prosecuting, administrative, or regulatory authority. Nevertheless, the Fraud Section and EDNY will bring this Agreement and the nature and quality of the conduct, cooperation and remediation of the Defendant, its direct or indirect affiliates, subsidiaries, and joint ventures, to the attention of other prosecuting authorities or other agencies, as well as debarment authorities and Multilateral Development Banks ("MDBs"), if requested by the Defendant. By agreeing to provide this information to such authorities, the Fraud Section and EDNY are not agreeing to advocate on behalf of the Defendant, but rather are agreeing to provide facts to be evaluated independently by such authorities.

6. The Defendant agrees that this Agreement will be executed by an authorized corporate representative. The Defendant further agrees that, consistent with the process provided for in the Defendant's by-laws for authorizing action by a representative, a power of attorney duly enacted by the Defendant's officers, in the form attached to this Agreement as Attachment A ("Certificate of Corporate Resolutions"), authorizes the Defendant to enter into this Agreement and take all necessary steps to effectuate this Agreement, and that the signatures on this Agreement by the Defendant and its counsel are authorized by the Defendant's officers, on behalf of the Defendant.

7. The Defendant agrees that it has the full legal right, power, and authority to enter into and perform all of its obligations under this Agreement.

8. The Defendant agrees to abide by all terms and obligations of this Agreement as described herein, including, but not limited to, the following:

a. to plead guilty as set forth in this Agreement;

b. to abide by all sentencing stipulations contained in this Agreement;

c. to appear, through its duly appointed representatives, as ordered for all court appearances, and obey any other ongoing court order in this matter, consistent with all applicable U.S. and foreign laws, procedures, and regulations;

d. to commit no further crimes;

e. to be truthful at all times with the Court;

f. to pay the applicable fine and special assessment;

g. to cooperate fully with the Fraud Section and EDNY as described in Paragraph 11;

h. to implement a compliance program as described in Paragraph 9 and Attachment C; and

i. to retain an independent compliance monitor pursuant to Paragraphs 30 to 32 and Attachment D.

9. The Defendant represents that it has implemented and will continue to implement a compliance and ethics program throughout its operations, including those of its affiliates, agents, and joint ventures, and those of its contractors and subcontractors whose responsibilities include interacting with foreign officials or other activities carrying a high risk of corruption, designed to prevent and detect violations of the FCPA and other applicable anti-corruption laws. In order to address any deficiencies in its internal accounting controls, policies, and procedures, the Defendant represents that it has undertaken, and will continue to undertake in the future, in a manner consistent with all of its obligations under this Agreement, a review of its existing internal accounting controls, policies, and procedures regarding compliance with the FCPA and other applicable anti-corruption laws. Where necessary and appropriate, the Defendant will adopt new or modify existing internal controls, policies, and procedures in order to ensure that the Defendant maintains: (a) an effective system of internal accounting controls designed to

ensure the making and keeping of fair and accurate books, records, and accounts; and (b) a rigorous anti-corruption compliance program that incorporates relevant internal accounting controls, as well as policies and procedures designed to effectively detect and deter violations of the FCPA and other applicable anti-corruption laws. The compliance program, including the internal accounting controls system, will include, but not be limited to, the minimum elements set forth in Attachment C. The Fraud Section and EDNY, in their sole discretion, may consider the Monitor's certification decision in assessing the Defendant's compliance program.

10. Except as may otherwise be agreed by the parties in connection with a particular transaction, the Defendant agrees that in the event that, during the Term of the Agreement, it undertakes any change in corporate form, including if it sells, merges, or transfers business operations that are material to the Defendant's consolidated operations, or to the operations of any subsidiaries or affiliates involved in the conduct described in the Statement of Facts, as they exist as of the date of this Agreement, whether such sale is structured as a sale, asset sale, merger, transfer, or other change in corporate form, it shall include in any contract for sale, merger, transfer, or other change in corporate form a provision binding the purchaser, or any successor in interest thereto, to the obligations described in this Agreement. The purchaser or successor in interest must also agree in writing that the Fraud Section and EDNY's ability to declare a breach under this Agreement is applicable in full force to that entity. The Defendant agrees that the failure to include these provisions in the transaction will make any such transaction null and void. The Defendant shall provide notice to the Fraud Section and EDNY at least 30 days prior to undertaking any such sale, merger, transfer, or other change in corporate form. If the Fraud Section and EDNY notify the Defendant prior to such transaction (or series of transactions) that it has determined that the transaction(s) has the effect of circumventing or frustrating the enforcement purposes of this Agreement, as determined in the sole discretion of

the Fraud Section and EDNY, the Defendant agrees that such transaction(s) will not be consummated. In addition, if at any time during the Term of the Agreement the Fraud Section and EDNY determine in their sole discretion that the Defendant has engaged in a transaction(s) that has the effect of circumventing or frustrating the enforcement purposes of this Agreement, it may deem it a breach of this Agreement pursuant to Paragraphs 24 to 27 of this Agreement. Nothing herein shall restrict the Defendant from indemnifying (or otherwise holding harmless) the purchaser or successor in interest for penalties or other costs arising from any conduct that may have occurred prior to the date of the transaction, so long as such indemnification does not have the effect of circumventing or frustrating the enforcement purposes of this Agreement, as determined by the Fraud Section and EDNY.

11. The Defendant shall cooperate fully with the Fraud Section and EDNY in any and all matters relating to the conduct described in this Agreement and the Statement of Facts, and any individual or entity referred to therein, as well as any and all matters relating to corrupt payments, false books and records, the failure to implement adequate internal accounting controls, investment adviser fraud, mail, wire, securities, or bank fraud, false statements to a bank, obstruction of justice, and money laundering, subject to applicable law and regulations, until the later of the date upon which all investigations, prosecutions and proceedings, including those involving Braskem S.A. ("Braskem"), an entity that is controlled by the Defendant, arising out of such conduct are concluded, or the end of the Term. At the request of the Fraud Section and EDNY, the Defendant shall also cooperate fully with other domestic or foreign law enforcement and regulatory authorities and agencies, as well as the MDBs, in any investigation of the Defendant, its affiliates, including Braskem and its affiliates, or any of its present or former officers, directors, employees, agents, and consultants, or any other party, in any and all matters relating to corrupt payments, false books and records, the failure to implement adequate

internal accounting controls, investment adviser fraud, mail, wire, securities, bank fraud, or false statements to a bank, obstruction of justice, and money laundering. The Defendant agrees that its cooperation pursuant to this Paragraph shall include, but not be limited to, the following, subject to local law and regulations, including relevant data privacy and national security laws and regulations:

a. The Defendant shall truthfully disclose all factual information not protected by a valid claim of attorney-client privilege or work product doctrine with respect to its activities, those of its subsidiary companies and affiliates, and those of its present and former directors, officers, employees, agents, and consultants, including any evidence or allegations and internal or external investigations, about which the Defendant has any knowledge or about which the Fraud Section and EDNY may inquire. This obligation of truthful disclosure includes, but is not limited to, the obligation of the Defendant to provide to the Fraud Section and EDNY, upon request, any document, record or other tangible evidence about which the Fraud Section and EDNY may inquire of the Defendant.

b. Upon request of the Fraud Section and EDNY, the Defendant shall designate knowledgeable employees, agents or attorneys to provide to the Fraud Section and EDNY the information and materials described in Paragraph 11(a) above on behalf of the Defendant. It is further understood that the Defendant must at all times provide complete, truthful, and accurate information.

c. The Defendant shall use its best efforts to make available for interviews or testimony, as requested by the Fraud Section and EDNY, present or former officers, directors, employees, agents and consultants of the Defendant. This obligation includes, but is not limited to, sworn testimony before a federal grand jury or in federal trials, as well as interviews with domestic or foreign law enforcement and regulatory authorities. Cooperation under this

Paragraph shall include identification of witnesses who, to the knowledge of the Defendant, may have material information regarding the matters under investigation.

d. With respect to any information, testimony, documents, records or other tangible evidence provided to the Fraud Section and EDNY pursuant to this Agreement, the Defendant consents to any and all disclosures, subject to applicable law and regulations, to other governmental authorities, including United States authorities and those of a foreign government, as well as the MDBs, of such materials as the Fraud Section and EDNY, in their sole discretion, shall deem appropriate.

12. In addition to the obligations in Paragraph 11, during the Term, should the Defendant learn of any evidence or allegation of conduct that would be a possible violation of the FCPA anti-bribery or accounting provisions had the conduct occurred within the jurisdiction of the United States, the Defendant shall promptly report such evidence or allegation to the Fraud Section and EDNY. Thirty days prior to the end of the Term, the Defendant, by the Chief Executive Officer of the Defendant and the Chief Financial Officer of the Defendant, will certify to the Fraud Section and EDNY that the Defendant has met its disclosure obligations pursuant to this Paragraph. Each certification will be deemed a material statement and representation by the Defendant to the executive branch of the United States for purposes of 18 U.S.C. § 1001, and it will be deemed to have been made in the judicial district in which this Agreement is filed.

13. The Defendant agrees that any fine imposed by the Court will be due and payable as specified in Paragraph 21 below, and that any restitution imposed by the Court will be due and payable in accordance with the Court's order. The Defendant further agrees to pay to the Clerk of the Court for the United States District Court for the Eastern District of New York the mandatory special assessment of $400 (pursuant to 18 U.S.C. § 3103(a)(2)(B)) within ten (10) business days from the date of sentencing.

THE UNITED STATES' AGREEMENT

14. In exchange for the guilty plea of the Defendant and the complete fulfillment of all of its obligations under this Agreement, the Fraud Section and EDNY agree that they will not file additional criminal charges against the Defendant or any of its direct or indirect subsidiaries or joint ventures relating to any of the conduct described in the Information or the Statement of Facts, except for the charges against Braskem S.A. specified in the Information and Plea Agreement between the Fraud Section and EDNY and Braskem S.A. filed on December 21, 2016 ("Braskem Plea Agreement"). The Fraud Section and EDNY, however, may use any information related to the conduct described in the Statement of Facts against the Defendant: (a) in a prosecution for perjury or obstruction of justice; (b) in a prosecution for making a false statement; (c) in a prosecution or other proceeding relating to any crime of violence; or (d) in a prosecution or other proceeding relating to a violation of any provision of Title 26 of the United States Code. This Agreement does not provide any protection against prosecution for any future conduct by the Defendant or by any of its affiliates, subsidiaries, officers, directors, employees, agents or consultants, whether or not disclosed by the Defendant pursuant to the terms of this Agreement. In addition, this Agreement does not provide any protection against prosecution of any individuals, regardless of their affiliation with the Defendant. The Defendant agrees that nothing in this Agreement is intended to release the Defendant from any and all of the Defendant's tax liabilities and reporting obligations for any and all income not properly reported and/or legally or illegally obtained or derived.

FACTUAL BASIS

15. The Defendant is pleading guilty because it is guilty of the charges contained in the Information. The Defendant admits, agrees, and stipulates that the factual allegations set forth in the Information and the Statement of Facts are true and correct, that it is responsible for

the acts of its affiliates, subsidiaries, officers, directors, employees, and agents described in the Information and the Statement of Facts, and that the Information and the Statement of Facts accurately reflect the Defendant's criminal conduct. The Defendant stipulates to the admissibility of the Statement of Facts in any proceeding by the Fraud Section and EDNY, including any trial, guilty plea, or sentencing proceeding, and will not contradict anything in the attached Statement of Facts at any such proceeding.

THE DEFENDANT'S WAIVER OF RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL

16. Federal Rule of Criminal Procedure 11(f) and Federal Rule of Evidence 410 limit the admissibility of statements made in the course of plea proceedings or plea discussions in both civil and criminal proceedings, if the guilty plea is later withdrawn. The Defendant expressly warrants that it has discussed these rules with its counsel and understands them. Solely to the extent set forth below, the Defendant voluntarily waives and gives up the rights enumerated in Federal Rule of Criminal Procedure 11(f) and Federal Rule of Evidence 410. Specifically, the Defendant understands and agrees that any statements that it makes in the course of its guilty plea or in connection with the Agreement are admissible against it for any purpose in any U.S. federal criminal proceeding if, even though the Fraud Section and EDNY have fulfilled all of their obligations under this Agreement and the Court has imposed the agreed-upon sentence, the Defendant nevertheless withdraws its guilty plea.

17. The Defendant is satisfied that the Defendant's attorneys have rendered effective assistance. The Defendant understands that by entering into this Agreement, the Defendant surrenders certain rights as provided in this Agreement. The Defendant understands that the rights of criminal defendants include the following:

a. the right to plead not guilty and to persist in that plea;

b. the right to a jury trial;

c. the right to be represented by counsel – and if necessary have the court appoint counsel – at trial and at every other stage of the proceedings;

d. the right at trial to confront and cross-examine adverse witnesses, to be protected from compelled self-incrimination, to testify and present evidence, and to compel the attendance of witnesses; and

e. pursuant to Title 18, United States Code, Section 3742, the right to appeal the sentence imposed.

Nonetheless, the Defendant knowingly waives the right to appeal or collaterally attack the conviction and any sentence within the statutory maximum described below (or the manner in which that sentence was determined) on the grounds set forth in Title 18, United States Code, Section 3742, or on any ground whatsoever except those specifically excluded in this Paragraph, in exchange for the concessions made by the Fraud Section and EDNY in this plea agreement. This Agreement does not affect the rights or obligations of the Fraud Section and EDNY as set forth in Title 18, United States Code, Section 3742(b). The Defendant also knowingly waives the right to bring any collateral challenge challenging either the conviction, or the sentence imposed in this case. The Defendant hereby waives all rights, whether asserted directly or by a representative, to request or receive from any department or agency of the United States any records pertaining to the investigation or prosecution of this case, including without limitation any records that may be sought under the Freedom of Information Act, Title 5, United States Code, Section 552, or the Privacy Act, Title 5, United States Code, Section 552a. The Defendant waives all defenses based on the statute of limitations and venue with respect to any prosecution related to the conduct described in the Information and the Statement of Facts including any prosecution that is not time-barred on the date that this Agreement is signed in the event that: (a) the conviction is later vacated for any reason; (b) the Defendant violates this Agreement; or (c)

the plea is later withdrawn, provided such prosecution is brought within one year of any such vacation of conviction, violation of the Agreement, or withdrawal of plea plus the remaining time period of the statute of limitations as of the date that this Agreement is signed. The Fraud Section and EDNY are free to take any position on appeal or any other post-judgment matter. The parties agree that any challenge to the Defendant's sentence that is not foreclosed by this Paragraph will be limited to that portion of the sentencing calculation that is inconsistent with (or not addressed by) this waiver. Nothing in the foregoing waiver of appellate and collateral review rights shall preclude the Defendant from raising a claim of ineffective assistance of counsel in an appropriate forum.

PENALTY

18. The statutory maximum sentence that the Court can impose for a violation of Title 18, United States Code, Section 371, is: a fine of $500,000 or twice the gross pecuniary gain or gross pecuniary loss resulting from the offense, whichever is greatest, Title 15, United States Code, Section 78ff(a) and Title 18, United States Code, Section 3571(c), (d); five years' probation, Title 18, United States Code, Section 3561(c)(1); and a mandatory special assessment of $400 per count, Title 18, United States Code, Section 3013(a)(2)(B). In this case, the parties agree that the gross pecuniary gain resulting from the offense is $3.336 billion. Therefore, pursuant to 18 U.S.C. § 3571(d), the maximum fine that may be imposed is twice the gross gain, or $6.672 billion per offense.

SENTENCING RECOMMENDATION

19. The parties agree that pursuant to *United States v. Booker*, 543 U.S. 220 (2005), the Court must determine an advisory sentencing guideline range pursuant to the United States Sentencing Guidelines. The Court will then determine a reasonable sentence within the statutory range after considering the advisory sentencing guideline range and the factors listed in Title 18,

United States Code, Section 3553(a). The parties' agreement herein to any guideline sentencing factors constitutes proof of those factors sufficient to satisfy the applicable burden of proof. The Defendant also understands that if the Court accepts this Agreement, the Court is bound by the sentencing provisions in Paragraph 18.

20. The Fraud Section, EDNY and the Defendant agree that a faithful application of the United States Sentencing Guidelines (U.S.S.G.) to determine the applicable fine range yields the following analysis:

a. The 2016 USSG are applicable to this matter.

b. Offense Level—Bribery Conduct (Highest Offense Level). Based upon USSG § 2C1.1, the total offense level is 48, calculated as follows:

(a)(2)	Base Offense Level	12
(b)(1)	Multiple Bribes	+2
(b)(2)	Value of Benefit more than $550,000,000	+30
(b)(3)	High Level Official Involved	+4
Total Offense Level		48

c. Base Fine. Based upon USSG § 8C2.4(a)(2), the base fine is $3.336 billion.

d. Culpability Score. Based upon USSG § 8C2.5 and 8C4.1, the culpability score is 9, calculated as follows:

(a)	Base Culpability Score	5
(b)(1)(A)(i)	5,000 or More Employees and Participation by High-Level Personnel	+5
(e)	Obstruction of Justice	+3
(g)(2)	Self-Disclosure and Cooperation	-2
8C4.1	Substantial Assistance Against Others	-2
TOTAL		9

Calculation of Fine Range:

Base Fine	$3.336 billion
Multipliers	1.8 (min)/ 3.6 (max)
Fine Range	$6.0048 billion to $12.0096 billion

21. Pursuant to Rule 11(c)(1)(C) of the Federal Rules of Criminal Procedure, the Fraud Section, EDNY and the Defendant agree that the following represents the appropriate disposition of the case:

a. Disposition. Pursuant to Fed. R. Crim. P. 11(c)(1)(C), the Fraud Section, EDNY and the Defendant agree that the appropriate disposition of this case is as set forth above, and agree to recommend jointly that the Court, at a hearing to be scheduled at an agreed upon time, impose a sentence requiring the Defendant to pay a criminal fine, as noted below. Specifically, the parties agree, based on the application of the United States Sentencing Guidelines, that the appropriate total criminal penalty is $4,503,600,000. This reflects a 25 percent discount off of the bottom of the applicable Sentencing Guidelines fine range for the Defendant's full cooperation and remediation.

b. The Defendant has made representations to the Fraud Section, EDNY and the Brazilian authorities that the Defendant has an inability to pay a criminal fine in excess of $2,600,000,000, including anticipated adjustments for exchange rates between the United States Dollar and the Brazilian Real and interest payments. Based on those representations, the Defendant has agreed to a criminal penalty of $2,600,000,000 payable to the United States, Brazil, and Switzerland on the time schedule allotted by their respective agreements.

c. The Fraud Section, EDNY and the Brazilian authorities will conduct an independent analysis to verify the accuracy of the Defendant's representations ("the Analysis"),

with such verification to be completed no later than March 31, 2017. Upon completion, if any additional amount is determined by the Fraud Section, EDNY and the Brazilian authorities to be available, consistent with the Defendant's ability to pay, such additional amount will be added to the total criminal penalty of $2,600,000,000 ("Total Criminal Penalty"). The Analysis will also verify the amounts the Defendant is able to pay as of June 30, 2017 and within five years of the date of the Agreement.

d. On June 30, 2017, the Defendant agrees to pay into an escrow account for the benefit of the United States Treasury an amount equal to 10 percent of the principal of the Total Criminal Penalty plus 10 percent of any interest that accrues on that amount between the date of the Agreement and the date of the payment, subject to the Analysis. On or before December 31, 2021, the Defendant will pay the Brazilian authorities at least an amount equal to 10 percent of the principal of the Total Criminal Penalty plus 10 percent of any interest that accrues from the date of the Agreement until December 31, 2021, subject to the Analysis. Both the principal and the interest amounts set forth in the Agreement will be determined by application of the Brazilian SELIC rate. The Defendant's payment obligations to the United States will be complete on June 30, 2017, so long as the Defendant pays the remaining amount of the Total Criminal Penalty to Brazil and Switzerland. The Total Criminal Penalty will be offset by the amount the Defendant pays to Brazil and Switzerland over the full term of their respective agreements. The Defendant shall not seek or accept directly or indirectly reimbursement or indemnification from any source with regard to the penalty or disgorgement amounts that the Defendant pays pursuant to the Agreement or any other agreement entered into with an enforcement authority or regulator concerning the facts set forth in the Statement of Facts. The Defendant further acknowledges that no tax deduction may be sought in connection with the payment of any part of the Total Criminal Penalty.

e. Mandatory Special Assessment. The Defendant shall pay to the Clerk of the Court for the United States District Court for the Eastern District of New York within 10 days of the time of sentencing the mandatory special assessment of $400.

22. This Agreement is presented to the Court pursuant to Fed. R. Crim. P. 11(c)(1)(C). The Defendant understands that, if the Court rejects this Agreement, the Court must: (a) inform the parties that the Court rejects the Agreement; (b) advise the Defendant's counsel that the Court is not required to follow the Agreement and afford the Defendant the opportunity to withdraw its plea; and (c) advise the Defendant that if the plea is not withdrawn, the Court may dispose of the case less favorably toward the Defendant than the Agreement contemplated. The Defendant further understands that if the Court refuses to accept any provision of this Agreement, neither party shall be bound by the provisions of the Agreement.

23. The Defendant, the Fraud Section and EDNY waive the preparation of a Pre-Sentence Investigation Report. The Defendant understands that the decision whether to proceed with the sentencing proceeding without a Pre-Sentence Investigation Report is exclusively that of the Court. In the event the Court directs the preparation of a Pre-Sentence Investigation Report, the Fraud Section and EDNY will fully inform the preparer of the Pre-Sentence Investigation Report and the Court of the facts and law related to the Defendant's case. At the time of the plea hearing, the parties will suggest mutually agreeable and convenient dates for the sentencing.

BREACH OF AGREEMENT

24. If the Defendant (a) commits any felony under U.S. federal law; (b) provides in connection with this Agreement deliberately false, incomplete, or misleading information; (c) fails to cooperate as set forth in Paragraphs 11 and 12 of this Agreement; (d) fails to implement a compliance program as set forth in Paragraph 9 of this Agreement and Attachment C; (e) commits any acts that, had they occurred within the jurisdictional reach of the FCPA, would be a

violation of the FCPA; or (f) otherwise fails specifically to perform or to fulfill completely each of the Defendant's obligations under the Agreement, regardless of whether the Fraud Section and EDNY become aware of such a breach after the Term, the Defendant shall thereafter be subject to prosecution for any federal criminal violation of which the Fraud Section and EDNY have knowledge, including, but not limited to, the charges in the Information described in Paragraph 3, which may be pursued by the Fraud Section, EDNY or any other United States Attorney's Office that has venue over the conduct. Determination of whether the Defendant has breached the Agreement and whether to pursue prosecution of the Defendant shall be in the Fraud Section and EDNY's sole discretion. Any such prosecution may be premised on information provided by the Defendant or its personnel. Any such prosecution relating to the conduct described in the Information and the attached Statement of Facts or relating to conduct known to the Fraud Section and EDNY prior to the date on which this Agreement was signed that is not time-barred by the applicable statute of limitations on the date of the signing of this Agreement may be commenced against the Defendant, notwithstanding the expiration of the statute of limitations, between the signing of this Agreement and the expiration of the Term of the Agreement plus one year. Thus, by signing this Agreement, the Defendant agrees that the statute of limitations with respect to any such prosecution that is not time-barred on the date of the signing of this Agreement shall be tolled for the Term of the Agreement plus one year. The Defendant gives up all defenses based on the statute of limitations, any claim of pre-indictment delay, or any speedy trial claim with respect to any such prosecution or action, except to the extent that such defenses existed as of the date of the signing of this Agreement. In addition, the Defendant agrees that the statute of limitations as to any violation of federal law that occurs during the term of the cooperation obligations provided for in Paragraph 11 of the Agreement will be tolled from the date upon which the violation occurs until the earlier of the date upon which the Fraud Section

and EDNY are made aware of the violation or the duration of the Term plus five years, and that this period shall be excluded from any calculation of time for purposes of the application of the statute of limitations.

25. In the event the Fraud Section and EDNY determine that the Defendant has breached this Agreement, the Fraud Section and EDNY agree to provide the Defendant with written notice of such breach prior to instituting any prosecution resulting from such breach. Within 30 days of receipt of such notice, the Defendant shall have the opportunity to respond to the Fraud Section and EDNY in writing to explain the nature and circumstances of such breach, as well as the actions the Defendant has taken to address and remediate the situation, which explanation the Fraud Section and EDNY shall consider in determining whether to pursue prosecution of the Defendant.

26. In the event that the Fraud Section and EDNY determine that the Defendant has breached this Agreement: (a) all statements made by or on behalf of the Defendant to the Fraud Section and EDNY or to the Court, including the Information and the Statement of Facts, and any testimony given by the Defendant before a grand jury, a court, or any tribunal, or at any legislative hearings, whether prior or subsequent to this Agreement, and any leads derived from such statements or testimony, shall be admissible in evidence in any and all criminal proceedings brought by the Fraud Section and EDNY against the Defendant; and (b) the Defendant shall not assert any claim under the United States Constitution, Rule 11(f) of the Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 410 of the Federal Rules of Evidence, or any other federal rule that any such statements or testimony made by or on behalf of the Defendant prior or subsequent to this Agreement, or any leads derived therefrom, should be suppressed or are otherwise inadmissible. The decision whether conduct or statements of any current director, officer or employee, or any person acting on behalf of, or at the direction of, the Defendant, will be imputed to the Defendant

for the purpose of determining whether the Defendant has violated any provision of this Agreement shall be in the sole discretion of the Fraud Section and EDNY.

27. The Defendant acknowledges that the Fraud Section and EDNY have made no representations, assurances, or promises concerning what sentence may be imposed by the Court if the Defendant breaches this Agreement and this matter proceeds to judgment. The Defendant further acknowledges that any such sentence is solely within the discretion of the Court and that nothing in this Agreement binds or restricts the Court in the exercise of such discretion.

PUBLIC STATEMENTS BY THE DEFENDANT

28. The Defendant expressly agrees that it shall not, through present or future attorneys, officers, directors, employees, agents or any other person authorized to speak for the Defendant make any public statement, in litigation or otherwise, contradicting the acceptance of responsibility by the Defendant set forth above or the facts described in the Information and the Statement of Facts. Any such contradictory statement shall, subject to cure rights of the Defendant described below, constitute a breach of this Agreement, and the Defendant thereafter shall be subject to prosecution as set forth in Paragraphs 24 to 27 of this Agreement. The decision whether any public statement by any such person contradicting a fact contained in the Information or the Statement of Facts will be imputed to the Defendant for the purpose of determining whether it has breached this Agreement shall be at the sole discretion of the Fraud Section and EDNY. If the Fraud Section and EDNY determine that a public statement by any such person contradicts in whole or in part a statement contained in the Information or the Statement of Facts, the Fraud Section and EDNY shall so notify the Defendant, and the Defendant may avoid a breach of this Agreement by publicly repudiating such statement(s) within five business days after notification. The Defendant shall be permitted to raise defenses and to assert affirmative claims in other proceedings relating to the matters set forth in the

Information and the Statement of Facts provided that such defenses and claims do not contradict, in whole or in part, a statement contained in the Information or the Statement of Facts. This Paragraph does not apply to any statement made by any present or former officer, director, employee, or agent of the Defendant in the course of any criminal, regulatory, or civil case initiated against such individual, unless such individual is speaking on behalf of the Defendant.

29. The Defendant agrees that if it or any of its direct or indirect subsidiaries or affiliates over which the Defendant exercises control issues a press release or holds any press conference in connection with this Agreement, the Defendant shall first consult the Fraud Section and EDNY to determine (a) whether the text of the release or proposed statements at the press conference are true and accurate with respect to matters between the Fraud Section, EDNY and the Defendant; and (b) whether the Fraud Section and EDNY have any objection to the release or statement.

INDEPENDENT COMPLIANCE MONITOR

30. Promptly after the Fraud Section and EDNY's selection pursuant to Paragraph 31 below, the Defendant agrees to retain the Monitor for the term specified in Paragraph 32. The Monitor's duties and authority, and the obligations of the Defendant with respect to the Monitor and the Fraud Section and EDNY, are set forth in Attachment D, which is incorporated by reference into this Agreement. No later than the date of execution of this Agreement, the Defendant will propose to the Fraud Section and EDNY a pool of three qualified candidates to serve as the Monitor. The parties will endeavor to complete the monitor selection process within 60 days of the execution of this agreement. The Monitor candidates or their team members shall have, at a minimum, the following qualifications:

a. demonstrated expertise with respect to the FCPA and other applicable anti-corruption laws, including experience counseling on FCPA issues;

b. experience designing and/or reviewing corporate compliance policies, procedures and internal controls, including FCPA and anti-corruption policies, procedures and internal controls;

c. the ability to access and deploy resources as necessary to discharge the Monitor's duties as described in the Agreement; and

d. sufficient independence from the Defendant to ensure effective and impartial performance of the Monitor's duties as described in the Agreement.

31. The Fraud Section and EDNY retain the right, in their sole discretion, to choose the Monitor from among the candidates proposed by the Defendant, though the Defendant may express its preference(s) among the candidates. If the Fraud Section and EDNY determine, in their sole discretion, that any of the candidates are not, in fact, qualified to serve as the Monitor, or if the Fraud Section and EDNY, in their sole discretion, are not satisfied with the candidates proposed, the Fraud Section and EDNY reserve the right to request that the Defendant nominate additional candidates. In the event the Fraud Section and EDNY reject all proposed Monitors, the Defendant shall propose an additional three candidates within 20 business days after receiving notice of the rejection. This process shall continue until a Monitor acceptable to both parties is chosen. The Fraud Section, EDNY and the Defendant will use their best efforts to complete the selection process within 60 calendar days of the execution of this Agreement. If, during the term of the monitorship, the Monitor becomes unable to perform his or her obligations as set out herein and in Attachment D, or if the Fraud Section and EDNY in their sole discretion determine that the Monitor cannot fulfill such obligations to the satisfaction of the Office, the Office shall notify the Defendant of the release of the Monitor, and the Defendant shall within 30 calendar days of such notice recommend a pool of three qualified Monitor candidates from which the Fraud Section and EDNY will choose a replacement.

32. The Monitor's term shall be three years from the date on which the Monitor is retained by the Defendant, subject to extension or early termination as described in Paragraph 1. The Monitor's powers, duties, and responsibilities, as well as additional circumstances that may support an extension of the Monitor's term, are set forth in Attachment D. The Defendant agrees that it will not employ or be affiliated with the Monitor or the Monitor's firm for a period of not less than two years from the date on which the Monitor's term expires. Nor will the Defendant discuss with the Monitor or the Monitor's firm the possibility of further employment or affiliation during the Monitor's term.

COMPLETE AGREEMENT

33. This document, including its attachments, states the full extent of the Agreement between the parties. There are no other promises or agreements, express or implied. Any modification of this Agreement shall be valid only if set forth in writing in a supplemental or revised plea agreement signed by all parties.

AGREED:

FOR ODEBRECHT S.A.:

Adriano Chaves Jucá Rolim
Attorney in Fact
Odebrecht S.A.

William Burck, Esq.
Richard Smith, Esq.
Eric Lyttle, Esq.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
Counsel to Odebrecht S.A.

Date: 12/21/16

FOR THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE:

ROBERT CAPERS
United States Attorney
Eastern District of New York

ANDREW WEISSMANN
Chief, Fraud Section
Criminal Division
U.S. Department of Justice

Alexandra Smith
Julia Nestor
Assistant U.S. Attorneys

Christopher Cestaro
David Last
David Fuhr
Lorinda Laryea
Kevin Gingras
Trial Attorneys

Date: December 21, 2016

COMPANY OFFICER'S CERTIFICATE

I have read the plea agreement between Odebrecht S.A. (the "Defendant") and the United States of America, by and through the Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, and the United States Attorney's Office for the Eastern District of New York (the "Agreement") and carefully reviewed every part of it with outside counsel for the Defendant. I understand the terms of the Agreement and voluntarily agree, on behalf of the Defendant, to each of its terms. Before signing the Agreement, I consulted outside counsel for the Defendant. Counsel fully advised me of the rights of the Defendant, of possible defenses, of the Sentencing Guidelines' provisions, and of the consequences of entering into this Agreement.

I have carefully reviewed the terms of the Agreement with those officers and members of the Defendant's Board of Directors with authorization to approve the Agreement. I have advised and caused outside counsel for the Defendant to advise those officers and members of the Defendant's Board of Directors with authorization to approve the Agreement fully of the rights of the Defendant, of possible defenses, of the Sentencing Guidelines' provisions, and of the consequences of entering into the Agreement.

No promises or inducements have been made other than those contained in the Agreement. Furthermore, no one has threatened or forced me, or to my knowledge any person authorizing the Agreement on behalf of the Defendant, in any way to enter into the Agreement. I am also satisfied with outside counsel's representation in this matter. I certify that I am the

Attorney in Fact for the Defendant and that I have been duly authorized by the Defendant to execute the Agreement on behalf of the Defendant.

Date: 12/21/16

ODEBRECHT S.A.

By: _____
Adriano Chaves Jucá Rolim
Attorney in Fact

CERTIFICATE OF COUNSEL

I am counsel for Odebrecht S.A. (the "Defendant") in the matter covered by the plea agreement between the Defendant and the United States of America, by and through the Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, and the United States Attorney's Office for the Eastern District of New York (the "Agreement"). In connection with such representation, I have examined relevant documents and have discussed the terms of the Agreement with those officers and members of the Defendant's Board of Directors with authorization to approve the Agreement. Based on our review of the foregoing materials and discussions, I am of the opinion that the representative of the Defendant has been duly authorized to enter into the Agreement on behalf of the Defendant and that the Agreement has been duly and validly authorized, executed, and delivered on behalf of the Defendant and is a valid and binding obligation of the Defendant. Further, I have carefully reviewed the terms of the Agreement with those officers and members of the Defendant's Board of Directors with authorization to approve the Agreement. I have fully advised them of the rights of the Defendant, of possible defenses, of the Sentencing Guidelines' provisions and of the consequences of entering into the Agreement. To my knowledge, the decision of the Defendant to enter into the Agreement, based on the authorization of the Board of Directors, is an informed and voluntary one.

Date: 12/21/16

By: _____
William Burck, Esq.
Richard Smith, Esq.
Eric Lyttle, Esq.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
Counsel to Odebrecht S.A.

ATTACHMENT A

CERTIFICATE OF CORPORATE RESOLUTIONS

A copy of the executed Certificate of Corporate Resolutions is annexed hereto as "Exhibit 1."

EXHIBIT 1

ODEBRECHT

POWER OF ATTORNEY

By this private Power of Attorney, **ODEBRECHT S.A.**, a company incorporated under the laws of Brazil, with its registered office at Av. Luis Viana, n. 2841, Paralela, Ed. Odebrecht, Salvador – BA, enrolled with the taxpayer registry (CNPJ/MF) under [redacted] ("**ODB**"), represented hereby by its undersigned Officers, appoints and constitutes, as its lawful Attorney-in-fact, **ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM**, Brazilian citizen, with Identity Card OAB/SP n. [redacted], enrolled with the tax payer registry (CPF) under n. [redacted], to execute and deliver, on behalf of ODB, a Certificate of Corporate Resolutions and related Officer's Certificate and any and all documents related to the plea agreement between ODB and the United States of America, by and through the Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, and the United States Attorney's Office for the Eastern District of New York. The Attorney-in-Fact is allowed to perform any and all acts required for the true and full performance of this Power of Attorney, which shall be effective for three (3) months from the date hereof and cannot be substituted.

Sao Paulo, December 15, 2016.

ODEBRECHT S.A.

13º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
PARA PRODUZIR EFEITO NO BRASIL E PARA VALER CONTRA TERCEIROS DEVERÁ SER TRADUZIDO PARA O IDIOM. NACIONAL E REGISTRADA A TRADUÇÃO
Lei de Registros Públicos, Artigo 130, § 6º

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7022

Reconheço Por Semelhança S/V Econômico a(s) Firma(s) de DANIEL BEZERRA VILLAR (0536819), MARCELA APARECIDA DREHER ANDRADE (0185757).
São Paulo, 19 de Dezembro de 2016. Em Test. da verdade.
JEAN PIERRE ROSA DA SILVA - ESCREVENTE
JEAN PIERRE ROSA DA SILVA - ESCREVENTE
Nº 0001/191216
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R$10,70

SELO NOTARIAL DE CONTROLE
111203
FIRMA 2
1098AA0424038

ATTACHMENT B

STATEMENT OF FACTS

The following Statement of Facts is incorporated by reference as part of the Plea Agreement (the "Agreement") between the United States Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section (the "Fraud Section"), the United States Attorney's Office for the Eastern District of New York (the "EDNY") and the defendant Odebrecht S.A. Odebrecht S.A. hereby agrees and stipulates that the following information is true and accurate. Odebrecht S.A. admits, accepts, and acknowledges that it is responsible for the acts of its officers, directors, employees, and agents as set forth below. The Fraud Section and EDNY's evidence establishes the following facts during the relevant time frame and proves beyond a reasonable doubt the charges set forth in the Criminal Information filed in the United States District Court for the Eastern District of New York pursuant to the Agreement:

RELEVANT ENTITIES AND INDIVIDUALS

1. Odebrecht S.A. was a Brazilian holding company that, through various operating entities (collectively "Odebrecht" or the "Company"), conducted business in multiple industries, including engineering, construction, infrastructure, energy, chemicals, utilities and real estate. Odebrecht had its headquarters in Salvador, state of Bahia, Brazil, and operated in 27 other countries, including the United States.

2. Construtora Norberto Odebrecht ("CNO") was a Brazilian-based subsidiary of Odebrecht S.A. CNO was responsible for carrying out projects in Brazil related to transport and logistics, energy, sanitation, urban development and public and corporate construction. CNO housed a unit called the Division of Structured Operations, which, as described below, was

created to allow Odebrecht to make unrecorded payments, many of which took the form of bribes to government officials in Brazil and abroad.

3. Braskem S.A. ("Braskem"), a *sociedade anônima* (corporation) organized under the laws of Brazil and headquartered in São Paulo, Brazil, was one of the largest petrochemical companies in the Americas, producing a portfolio of petrochemical and thermoplastic products. Odebrecht S.A. owned 50.11% of the voting shares and 38.1% of the total share capital of Braskem and effectively controlled the company. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("Petrobras"), Brazil's national oil company, owned 36.1% of the shares of Braskem. American depositary shares of Braskem traded on the New York Stock Exchange, and Braskem was required to file annual reports with the United States Securities and Exchange Commission (the "SEC") under Section 15(d) of the Exchange Act, Title 15, United States Code, Section 78o(d). Braskem was an "issuer" as that term is used in the Foreign Corrupt Practices Act (the "FCPA"), Title 15, United States Code, Sections 78dd-1(a) and 78m(b).

4. Smith & Nash Engineering Company ("S&N"), an unaffiliated shell company based in the British Virgin Islands, was established and managed at the Division of Structured Operations' direction. S&N was used by Odebrecht to further the bribery scheme, and to conceal and disguise improper payments made to, and for the benefit of, foreign officials and foreign political parties in various countries. S&N opened at least one offshore bank account (the "S&N Account") on behalf of Odebrecht. Odebrecht transferred money from various bank accounts, including several New York-based bank accounts (the "New York-based Accounts"), to the S&N Account. The funds in the S&N Account were then used, in part, to make direct and indirect bribe payments to foreign officials. A United States citizen and resident of New York and Florida was the authorized signatory on the S&N Account.

5. Arcadex Corporation ("Arcadex") was an unaffiliated shell company incorporated in Belize. Arcadex was established and managed at the Division of Structured Operations' direction and used by Odebrecht to further the bribery scheme, and to conceal and disguise improper payments made to, and for the benefit of, foreign officials and foreign political parties in various countries. Arcadex opened at least one offshore bank account (the "Arcadex Account") on behalf of Odebrecht. Odebrecht transferred money from various bank accounts, including the New York-based Accounts, to the Arcadex Account. The funds in the Arcadex Account were then used, in part, to make direct and indirect bribe payments to foreign officials.

6. Golac Projects and Construction Corporation ("Golac") was an unaffiliated shell company incorporated in the British Virgin Islands. Golac was established and managed at the Division of Structured Operations' direction and used by Odebrecht to further the bribery scheme, and to conceal and disguise corrupt payments made to, and for the benefit of, foreign officials and foreign political parties in various countries. Golac opened at least one offshore bank account (the "Golac Account") on behalf of Odebrecht. Odebrecht transferred money from various bank accounts, including the New York-based Accounts, to the Golac Account. The funds in the Golac Account were then used, in part, to make direct and indirect bribe payments to foreign officials.

7. "Odebrecht Employee 1," a citizen of Brazil whose identity is known to the United States and the Company, was an officer and senior executive of Odebrecht S.A. in or about and between January 2009 and December 2015 and an officer and senior executive of CNO in or about and between January 2002 and January 2010. Odebrecht Employee 1 was also a director of Braskem in or about and between 2009 and December 2015.

8. "Odebrecht Employee 2," a citizen of Brazil whose identity is known to the United States and the Company, was a senior executive in the Division of Structured Operations, in or about and between 2006 and 2015, and reported directly to Odebrecht Employee 1. Odebrecht Employee 2 operated the Division of Structured Operations to account for and disburse payments that were not included in Odebrecht's publicly-declared financials, including corrupt payments made to, or for the benefit of, foreign officials and foreign political parties in order to obtain and retain business for Odebrecht.

9. "Odebrecht Employee 3," a citizen of Brazil whose identity is known to the United States and the Company, was an executive of the Division of Structured Operations from approximately 2006 to 2015. Odebrecht Employee 3 reported to Odebrecht Employee 2 and was responsible for overseeing corrupt payments made in Brazil and abroad. In or about 2014 and 2015, while located in Miami, Florida, Odebrecht Employee 3 engaged in criminal conduct in furtherance of the scheme, including meetings with other co-conspirators to plan actions to be taken in connection with the Division of Structured Operations and the movement of criminal proceeds.

10. "Odebrecht Employee 4," a citizen of Brazil whose identity is known to the United States and the Company, was the Division of Structured Operations executive in charge of financial operations for complex and large payments made by the Division of Structured Operations outside of Brazil from approximately 2006 to 2015. Odebrecht Employee 4 also helped Odebrecht Employee 3 oversee the corrupt payments made by the Division of Structured Operations in Brazil. In or about 2014 and 2015, while located in Miami, Florida, Odebrecht Employee 4 engaged in conduct in furtherance of the scheme, including meetings with other co-

conspirators to plan actions to be taken in connection with the Division of Structured Operations and the movement of criminal proceeds.

11. "Odebrecht Employee 5," a citizen of Brazil whose identity is known to the United States and the Company, was a high-level executive of CNO from approximately 1997 to 2007. Thereafter, from approximately 2008 to 2010, Odebrecht Employee 5 held an officer position at CNO in the industrial works area, and in or about 2011 Odebrecht Employee 5 became a Corporate Leader within CNO. He remained in that position until approximately 2015. As the primary contact between Odebrecht and Petrobras between approximately 2004 and 2012, Odebrecht Employee 5 oversaw the negotiation and payment of bribes by Odebrecht to Petrobras officials to obtain and retain business with Petrobras.

12. "Odebrecht Employee 6," a citizen of Brazil whose identity is known to the United States and the Company, was a high-level executive of the international area of the engineering division of Odebrecht from approximately 2008 to 2015. Odebrecht Employee 6 reported to Odebrecht Employee 1 and was responsible for overseeing Odebrecht's Superintendent Directors, or country leaders, of Angola and several Latin American countries. As part of that supervision, Odebrecht Employee 6 approved many of the corrupt payments to foreign officials and foreign political parties outside of Brazil.

13. Petrobras was a Brazilian state-controlled oil company, and a minority shareholder in Braskem. Petrobras was headquartered in Rio de Janeiro, Brazil, and operated to refine, produce and distribute oil, oil products, gas, biofuels and energy. The Brazilian government directly owned approximately 50.3% of Petrobras's common shares with voting rights, while an additional 10% of the corporation's shares were controlled by the Brazilian Development Bank and Brazil's Sovereign Wealth Fund. Petrobras was an "agency" and

"instrumentality" of a foreign government, as those terms are used in the FCPA, Title 15, United States Code, Sections 78dd-1(f)(1) and 78dd-3(f)(2)(A).

14. "Brazilian Official 1," an individual whose identity is known to the United States and the Company, was an executive and director at Petrobras. Brazilian Official 1 was a "foreign official" within the meaning of the FCPA, Title 15, United States Code, Section 78dd-3(f)(2)(A).

15. "Brazilian Official 2," an individual whose identity is known to the United States and the Company, was an executive and director at Petrobras. Brazilian Official 2 was a "foreign official" within the meaning of the FCPA, Title 15, United States Code, Section 78dd-3(f)(2)(A).

16. "Brazilian Official 3," an individual whose identity is known to the United States and the Company, was a manager at Petrobras. Brazilian Official 3 was a "foreign official" within the meaning of the FCPA, Title 15, United States Code, Section 78dd-3(f)(2)(A).

17. "Brazilian Official 4," an individual whose identity is known to the United States and the Company, was a high-level state elected official in Brazil. Brazilian Official 4 was a "foreign official" within the meaning of the FCPA, Title 15, United States Code, Section 78dd-3(f)(2)(A).

18. "Brazilian Official 5," an individual whose identity is known to the United States and the Company, was a high-level official in the legislative branch of government in Brazil. Brazilian Official 5 was a "foreign official" within the meaning of the FCPA, Title 15, United States Code, Section 78dd-3(f)(2)(A).

OVERVIEW OF THE BRIBERY SCHEME

19. In or about and between 2001 and 2016, Odebrecht, together with its co-conspirators, knowingly and willfully conspired and agreed with others to corruptly provide hundreds of millions of dollars in payments and other things of value to, and for the benefit of, foreign officials, foreign political parties, foreign political party officials and foreign political candidates to secure an improper advantage and to influence those foreign officials, foreign political parties and foreign political candidates in order to obtain and retain business in various countries around the world.

20. During the relevant time period, Odebrecht, together with its co-conspirators, paid approximately $788 million in bribes in association with more than 100 projects in twelve countries, including Angola, Argentina, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru and Venezuela.

21. To further the criminal bribery scheme, Odebrecht and its co-conspirators created and funded an elaborate, secret financial structure that operated to account for and disburse corrupt bribe payments to, and for the benefit of, foreign officials, foreign political parties, foreign political party officials and foreign political candidates. Over time, the development and operation of this secret financial structure evolved, and in or about 2006, Odebrecht established the Division of Structured Operations, a standalone division within the Company. The Division of Structured Operations effectively functioned as a bribe department within Odebrecht and its related entities. To conceal its activities, the Division of Structured Operations utilized an entirely separate and off-book communications system called "Drousys," which allowed members of the Division of Structured Operations to communicate with one another and with

outside financial operators and other co-conspirators about the bribes through the use of secure emails and instant messages, utilizing codenames and passwords.

22. Odebrecht and its employees and agents took a number of steps while in the territory of the United States in furtherance of the corrupt scheme. For example, some of the offshore entities used by the Division of Structured Operations to hold and disburse unrecorded funds were established, owned and/or operated by individuals located in the United States. In addition, at times during the conspiracy, individuals working in the Division of Structured Operations, including Odebrecht Employee 3, Odebrecht Employee 4 and others, took steps in furtherance of the bribery scheme while located in the United States. For example, in or about 2014 and 2015, while located in Miami, Florida, Odebrecht Employee 3 and Odebrecht Employee 4 engaged in conduct related to certain projects in furtherance of the scheme, including meetings with other co-conspirators to plan actions to be taken in connection with the Division of Structured Operations, the movement of criminal proceeds and other criminal conduct.

23. In all, Odebrecht, together with its co-conspirators, paid more than $788 million in bribes to illegally secure projects in multiple countries – including, as described below, corrupt payments to Petrobras employees and executives; corrupt payments to other government officials in Brazil; and corrupt payments to foreign officials in eleven other countries – with ill-gotten benefits[1] to Odebrecht and its co-conspirators of approximately $3.336 billion.

[1] The term "benefit" as used in this Statement of Facts relates to any profits earned on a particular project for which a profit was generated as the result of a bribe payment. For projects that resulted in profits to Odebrecht that were less than the amount of the associated bribe payment, the amount of the bribe payment was used to calculate the "benefit."

THE DIVISION OF STRUCTURED OPERATIONS AND THE MANNER AND MEANS OF THE CONSPIRACY

24. The Division of Structured Operations was led by Odebrecht Employee 2 and staffed by other Odebrecht employees and/or agents (including Odebrecht Employee 3 and Odebrecht Employee 4) who worked with a series of financial operators or *doleiros* (also known as money traders, who functioned to exchange Brazilian Reais for American dollars). Odebrecht Employee 2 reported to Odebrecht Employee 1, who was responsible for approving corrupt payments made by the Division of Structured Operations until approximately 2009, and who, thereafter, received updates of the payments made by the Division of Structured Operations. After approximately 2009, Odebrecht Employee 1 delegated the responsibility for approving the corrupt payments to the business leaders in Brazil and the various country leaders in the other jurisdictions.

25. The Division of Structured Operations managed its "shadow" budget via two computer systems: (i) the "MyWebDay" system, which was used for making payment requests, processing payments, and generating and populating spreadsheets that tracked and internally accounted for the shadow budget; and (ii) the "Drousys" system, which allowed members of the Division of Structured Operations to communicate with one another and with outside financial operators and other co-conspirators using secure emails and instant messages. To conceal their corrupt activities, users of the Drousys system utilized a series of codenames to mask their identities, and referred to bribe recipients and intermediaries using additional codes and passwords.

26. To further conceal the Company's criminal conduct, the Division of Structured Operations managed and distributed funds that Odebrecht never recorded on its balance sheet. These "unrecorded funds" were generated by Odebrecht through a variety of methods, including

but not limited to: (i) standing overhead charges collected from subsidiaries; (ii) overcharges and fees that were attributed as legitimate to service providers and subcontractors but not included in project budgets; (iii) undeclared retainers and success fees for the purchase of company assets; and (iv) self-insurance and self-guarantee transactions.

27. Once generated, unrecorded funds were funneled by the Division of Structured Operations to a series of offshore entities that were not included on Odebrecht's balance sheet as related entities. These entities were established and managed at the Division of Structured Operations' direction by beneficial owners who were compensated for opening and, in some cases, operating these entities. Odebrecht used these offshore entities to further the bribery scheme, and to conceal and disguise improper payments made to, or for the benefit of, foreign officials, foreign political parties, foreign political party officials and foreign political candidates in various countries. Many of the transactions were layered through multiple levels of offshore entities and bank accounts throughout the world, often transferring the illicit funds through up to four levels of offshore bank accounts before reaching the final recipient. In this regard, members of the conspiracy sought to distance the origin of the funds from the final beneficiaries.

28. The funds were disbursed from the offshore entities at the Division of Structured Operations' direction. These disbursements were made by financial operators who acted on Odebrecht's behalf, including but not limited to the beneficial owners of the accounts and *doleiros,* who delivered the payments in cash both inside and outside Brazil in packages or suitcases at locations predetermined by the beneficiary of the funds; or made the payments via wire transfer through one or more of the offshore entities.

29. In furtherance of the bribery scheme and to facilitate the movement of illicit funds, Odebrecht and its co-conspirators also utilized banks with distinct features that would aid

in the scheme: specifically, smaller banks located in countries with strict laws regarding the protection of bank secrecy and the sharing of information with international law enforcement. To ensure the cooperation of these favored banks, Odebrecht and its co-conspirators frequently paid remuneration fees and higher rates to the banking institutions, and a percentage of each illicit transaction to certain complicit bank executives. The Division of Structured Operations counted on the collusion of the favored banks and their executives to conduct the transfers between accounts, largely relying on the use of fictitious contracts to backstop the transactions and bypass compliance inquiries. Certain co-conspirators, such as Odebrecht Employee 4, visited the countries where the final beneficiaries were located and brought them to the favored banks to open accounts to facilitate the illicit payment transfers.

30. After a particular favored bank located in Antigua began to falter, members of the conspiracy, including former executives with the faltering bank, purchased the Antiguan branch of an Austrian bank in or about 2010 or 2011. By virtue of this acquisition, other members of the conspiracy, including senior politicians from multiple countries receiving bribe payments, could open bank accounts and receive transfers without the risk of raising attention. By acquiring the bank, members of the conspiracy, including Odebrecht Employee 4 and others, willfully facilitated the illegal payment scheme. They also actively participated in obtaining fictitious contracts to support the operations of the Division of Structured Operations and responded directly to compliance issues in order to allow operations to be authorized.

31. Odebrecht caused wire transfers to be made to these and other bank accounts created by these offshore entities from Odebrecht-related bank accounts, including from several New York-based Accounts held by CNO.

CORRUPT PAYMENTS TO GOVERNMENT OFFICIALS IN BRAZIL

32. Beginning in at least as early as 2003 and continuing through approximately 2016, Odebrecht caused approximately $349 million in corrupt bribe payments to be made to political parties, foreign officials, and their representatives, in Brazil, in order to secure an improper advantage to obtain and retain business for Odebrecht. Odebrecht benefited more than $1.9 billion as a result of these corrupt payments.

Corrupt Payments to Obtain and Retain Business with Petrobras

33. Beginning in or about 2004 and continuing through at least 2012, Odebrecht agreed to make, and caused to be made, corrupt payments to, and for the benefit of, foreign officials, including Brazilian politicians and Petrobras executives and employees, in order to secure contracts with Petrobras.

34. As part of the scheme, Odebrecht participated in a series of meetings with other construction companies to evaluate and divide up future contracts for Petrobras projects among the companies (together, the "Cartel Companies"). Once it was determined which company or companies should be responsible for a certain project, as well as the price that Petrobras felt was appropriate for the particular project, it was agreed that only the predetermined company would present a qualifying bid, and that the other Cartel Companies would present proposals that would ensure the predetermined company's winning bid. In this manner, the Cartel Companies rotated the available Petrobras contracts between them.

35. Certain executives of Petrobras involved in awarding the projects on behalf of Petrobras were aware of the Cartel Companies' bid rigging, and in order to guarantee the continued success of the bid rigging scheme and to secure the contracts with Petrobras,

Odebrecht and the other Cartel Companies agreed to make corrupt payments to, and for the benefit of, these Petrobras executives, other Brazilian politicians and political parties.

36. For example, in or about October 2010, Odebrecht bid for and won a Petrobras contract for the provision of various environmental and security certification services that were necessary for various activities that Petrobras undertook abroad. In order to win the contract, Odebrecht agreed to pay bribes that would be forwarded to Brazilian political parties. Odebrecht Employee 5 met with certain of the Cartel Companies, all of which agreed that Odebrecht would get the contract; two of the Cartel Companies also agreed to provide proposals in such a way that would ensure that Odebrecht would win the bid. Odebrecht directed more than $40 million to certain Brazilian political parties from its Division of Structured Operations using unrecorded funds in connection with the project; and certain of the funds were paid directly to specific government officials.

37. Odebrecht caused numerous illicit payments to be made from United States-based bank accounts to perpetuate its bribe scheme in Brazil. For example, between at least December 2006 and December 2007, Odebrecht caused transfers totaling almost $40 million to be made from the New York-based Accounts to the S&N Account. Thereafter, in or between January and August 2011, Odebrecht used the S&N Account to make bribe payments, including paying approximately $3.5 million and almost 2 million Swiss Francs to the bank account of an offshore entity controlled by Brazilian Official 1, then an executive at Petrobras.

38. Similarly, in or about December 2009, Odebrecht caused transfers totaling approximately $20 million to be made from the New York-based Accounts to the Arcadex Account. Before and contemporaneously with the transfers from the New York-based Accounts, Odebrecht caused numerous money transfers to be made from the Arcadex Account to a second

Arcadex account (the "Second Arcadex Account") that was used to make bribe payments, including an approximately $430,000 bribe payment to a bank account controlled by Brazilian Official 2, then an executive at Petrobras.

39. Furthermore, in or about December 2008, Odebrecht caused transfers totaling almost $48 million to be made from the New York-based Accounts to the Golac Account. Thereafter, in or about and between December 2008 and July 2010, Odebrecht caused transfers from the Golac Account to three unrelated accounts in Panama and Antigua from which approximately $10 million was transferred to the accounts of three then-Petrobras executives Brazilian Official 1, Brazilian Official 2 and Brazilian Official 3.

Corrupt Payments to Obtain and Retain Other Business in Brazil

40. In addition to the corrupt payments to secure contracts with Petrobras, Odebrecht made and caused to be made corrupt payments to political parties, individual candidates and other government officials at the local, regional and national level in Brazil with unrecorded funds from the Division of Structured Operations in order to obtain and retain other business in Brazil.

41. For example, Odebrecht made and caused to be made corrupt payments to Brazilian officials with unrecorded funds in order to secure a transportation project in Brazil. Odebrecht was not part of the original group of companies awarded the project, but ultimately purchased the rights to participate in the project. Subsequently, Odebrecht agreed to make payments to Brazilian Official 4, a high-level state elected official in Brazil, in exchange for Brazilian Official 4's assistance in ensuring Odebrecht's continued work on the project. Between approximately 2010 and 2014, Odebrecht, through the Division of Structured Operations, made payments in Brazilian Reais (totaling more than $20 million) to Brazilian

Official 4 and other foreign officials in connection with the project. Odebrecht profited approximately $184 million from the project.

42. Similarly, in or about 2011, Brazilian Official 5, a high-level official within the legislative branch of government in Brazil, requested that Odebrecht make payments to a political party in exchange for the party's influence to continue a construction project in Rio de Janeiro from which Odebrecht stood to benefit. In or about and between 2011 and 2014, Odebrecht, through the Division of Structured Operations, made payments in Brazilian Reais (totaling approximately $9.7 million) to Brazilian Official 5, as did other companies involved in the project, in order to ensure future contributions to the project from certain government groups. Odebrecht profited approximately $142 million from the project.

CORRUPT PAYMENTS TO FOREIGN OFFICIALS AND POLITICAL PARTIES IN OTHER COUNTRIES

43. In or about and between 2001 and 2016, Odebrecht made and caused to be made approximately $439 million in corrupt payments to foreign political parties, foreign officials, and their representatives, in countries outside of Brazil, including Angola, Argentina, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru and Venezuela, in order to secure an improper advantage to obtain and retain business for Odebrecht in those countries. Odebrecht benefited more than $1.4 billion as a result of these corrupt payments.

44. Odebrecht made and caused to be made the majority of these corrupt payments to government officials; third parties associated with, and for the benefit of, government officials; and political parties or campaigns. All of the corrupt payments were made to secure an improper advantage for Odebrecht to obtain and retain business. Typically, the Division of Structured Operations executed the corrupt payments using unrecorded funds, either (i) in cash in the

country in question, or (ii) by deposits into accounts indicated by the ultimate beneficiaries or their intermediaries.

45. In or about and between 2008 and 2015, Odebrecht's corporate structure in Latin America was organized such that the senior-most country leaders reported to Odebrecht Employee 6, who was the Business Leader for Angola[2] and the above-referenced countries in Latin America, except Venezuela.

Angola

46. In or about and between 2006 and 2013, Odebrecht made and caused to be made more than $50 million in corrupt payments to government officials in Angola in order to secure public works contracts. Odebrecht realized benefits of approximately $261.7 million as a result of these corrupt payments.

47. For example, beginning in or about 2006, Odebrecht Employee 6 caused the Company to make approximately $8 million in corrupt payments to an Angolan government official to obtain infrastructure projects in Angola. Odebrecht also paid another approximately $1.19 million to a high-level official of an Angolan state-owned and state-controlled company to obtain business. The bribe payments were generally made with unrecorded funds and coordinated through the Division of Structured Operations.

Argentina

48. In or about and between 2007 and 2014, Odebrecht made and caused to be made more than $35 million in corrupt payments to intermediaries with the understanding that these payments would be passed, in part, to government officials in Argentina. The corrupt payments

[2] In July 2012, after a restructuring, Odebrecht Employee 6 no longer had oversight in Angola, but continued to have oversight in Latin America.

were made in association with at least three infrastructure projects, and Odebrecht realized benefits of approximately $278 million.

49. For example, in 2008, prior to a bid on government projects being finalized, Odebrecht agreed that, in order to secure the contracts, Odebrecht and others would commit to making a future payment to undisclosed government officials in Argentina in an unspecified amount. In or about and between 2011 and 2014, the Company, through the Division of Structured Operations, made payments totaling approximately $2.9 million to an intermediary with the understanding that the intermediary would pass the payments to Argentinian government officials.

50. Thereafter, in or about and between January 2011 and March 2014, Odebrecht made additional corrupt payments through the Division of Structured Operations totaling approximately $500,000 to private accounts at the direction of an intermediary, with the understanding that the payments were for the benefit of Argentinian government officials.

Colombia

51. In or about and between 2009 and 2014, Odebrecht made and caused to be made more than $11 million in corrupt payments in Colombia in order to secure public works contracts. The Company realized benefits of more than $50 million as a result of these corrupt payments.

52. For example, in or about and between 2009 and 2010, Odebrecht agreed to pay, and later paid through the Division of Structured Operations with Odebrecht Employee 6's authorization, a $6.5 million bribe to a government official in charge of awarding a construction project with the Colombian government in exchange for assistance with winning the project.

The Dominican Republic

53. In or about and between 2001 and 2014, Odebrecht made and caused to be made more than $92 million in corrupt payments to government officials and intermediaries working on their behalf in the Dominican Republic. Odebrecht realized benefits of more than $163 million as a result of these corrupt payments.

54. For example, in order to secure certain public works contracts in the Dominican Republic, Odebrecht paid bribes to an intermediary responsible for interfacing with the government with the understanding that the intermediary would pass the money, in part, to government officials. Most of the payments were made with unrecorded funds from the Division of Structured Operations with the authorization of Odebrecht Employee 6. Through this agreement, Odebrecht was able to influence governmental budget and financing approvals for certain projects in the Dominican Republic.

Ecuador

55. In or about and between 2007 and 2016, Odebrecht made and caused to be made more than $33.5 million in corrupt payments to government officials in Ecuador. Odebrecht realized benefits of more than $116 million as a result of these corrupt payments.

56. For example, in or about and between 2007 and 2008, Odebrecht experienced a number of problems related to a construction contract, and agreed with an intermediary to an Ecuadorian government official with control over public contracts to make corrupt payments to the government official to solve the problems. Odebrecht later delivered these payments in cash to the government official.

Guatemala

57. In or about and between 2013 and 2015, Odebrecht made and caused to be made approximately $18 million in corrupt payments to government officials in Guatemala in order to secure public works contracts. Odebrecht realized benefits of more than $34 million as a result of these corrupt payments.

58. For example, in relation to an infrastructure project awarded to Odebrecht, the Company agreed to pay a high-ranking Guatemalan government official a percentage of the value of the contract over the life of the project in exchange for the official assisting Odebrecht with obtaining payments under the contract. Odebrecht made approximately $11.5 million in corrupt payments, through the Division of Structured Operations and with Odebrecht Employee 6's approval, to companies designated by the Guatemalan official.

Mexico

59. In or about and between 2010 and 2014, Odebrecht made and caused to be made approximately $10.5 million in corrupt payments to government officials in Mexico in order to secure public works contracts. Odebrecht realized benefits of more than $39 million as a result of these corrupt payments.

60. For example, in or about October 2013, Odebrecht agreed to pay a bribe to a high-level official of a Mexican state-owned and state-controlled company in exchange for the official assisting the Company with winning a project. In or about and between December 2013 and late 2014, Odebrecht, through the Division of Structured Operations, paid the official $6 million.

Mozambique

61. In or about and between 2011 and 2014, Odebrecht made and caused to be made approximately $900,000 in corrupt payments to government officials in Mozambique.

62. The corrupt payments included approximately $250,000 in payments to a high-level government official in Mozambique in exchange for Odebrecht obtaining favorable terms on a government construction project, which the government had not been inclined to accept before Odebrecht offered to make the corrupt payment. Odebrecht made these payments in installments of $135,000 and $115,000 with the Division of Structured Operations' unrecorded funds from an offshore company.

Panama

63. In or about and between 2010 and 2014, Odebrecht made and caused to be made more than $59 million in corrupt payments to government officials and intermediaries working on their behalf in Panama in order to secure, among other things, public works contracts. Odebrecht realized benefits of more than $175 million as a result of these corrupt payments.

64. For example, in or about and between 2009 and 2012, Odebrecht agreed to pay $6 million to two close relatives of a high-level Panamanian government official in connection with government infrastructure projects, with the understanding that, in exchange for the payments, the government official would ensure Odebrecht's participation in and payment under the contracts. In order to effectuate the corrupt payments, Odebrecht utilized the Division of Structured Operations to make payments in unrecorded funds to offshore companies designated by the Panamanian government official and intermediaries.

Peru

65. In or about and between 2005 and 2014, Odebrecht made and caused to be made approximately $29 million in corrupt payments to government officials in Peru in order to secure public works contracts. Odebrecht realized benefits of more than $143 million as a result of these corrupt payments.

66. For example, in or about 2005, Odebrecht participated in a tender for a government infrastructure project. During the tender process, an Odebrecht employee was approached by an intermediary of a high-level official in the Peruvian government, who offered to support Odebrecht's bid, if, in the event that Odebrecht was awarded the project, it would make corrupt payments benefiting the government official. The payments were agreed to be paid through companies owned by an intermediary who had a relationship with the government official. After the initial conversations with the intermediary, the Odebrecht employee participated in several meetings, some of which were attended by the government official. Odebrecht won the tender and made corrupt payments totaling approximately $20 million from approximately 2005 to 2008 to specific companies, as directed by the intermediary, with unrecorded funds from the Division of Structured Operations.

67. Furthermore, in or about 2008, Odebrecht bid on a government transportation contract in Peru. In order to influence the bid committee to help Odebrecht secure the contract, Odebrecht agreed to pay $1.4 million to a high-level official in the Peruvian government and members of the tender committee for the project. In or about 2009, Odebrecht won the contract, valued at approximately $400 million. Odebrecht made the corrupt payments, which were approved by Odebrecht Employee 6, with unrecorded funds from the Division of Structured Operations.

Venezuela

68. In or about and between 2006 and 2015, Odebrecht made and caused to be made approximately $98 million in corrupt payments to government officials and intermediaries working on their behalf in Venezuela in order to obtain and retain public works contracts.

69. Odebrecht typically used intermediaries to negotiate contracts with government officials on behalf of the Company. Odebrecht understood that these intermediaries would pay bribes to government officials on behalf of the Company in order to influence the allocation of resources to Odebrecht projects, to obtain confidential pricing and bidding information in connection with those projects, and to obtain and retain contracts for those projects. Generally, these intermediaries charged a percentage of the contract price in connection with their work on behalf of the Company.

70. For example, Odebrecht paid an intermediary to help it obtain contracts with a Venezuelan state-owned and state-controlled company. During the negotiations, the intermediary made it clear that the money would be used to pay a bribe in exchange for obtaining certain service agreements and amendments, and that the intermediary represented various directors of the state-owned and state-controlled company. Odebrecht paid the intermediary approximately $39 million.

OBSTRUCTION OF JUSTICE

71. In or about 2014, Brazilian law enforcement authorities began an initially covert investigation into corruption related to Petrobras, called Lavo Jato or "Operation Carwash." Thereafter, related investigations were launched in the United States and Switzerland. After Odebrecht became aware of Lavo Jato and related investigations, certain individuals – including Odebrecht Employee 1 and employees and executives involved in the Division of Structured Operations – took steps to conceal or destroy evidence of criminal activities, and to hinder the various investigations. These steps included, but were not limited to, a directive from Odebrecht Employee 1 to Odebrecht employees to delete records that might reveal illegal activities.

72. Furthermore, in or about mid-2015, Odebrecht Employee 4 attended a meeting in Miami, Florida, with a consular official from Antigua and an intermediary to a high-level government official in Antigua. In order to conceal Odebrecht's corrupt activities, Odebrecht Employee 4 requested that the high-level official refrain from providing to international authorities various banking documents that would reveal illicit payments made by the Division of Structured Operations on behalf of Odebrecht, and agreed to pay $4 million to the high-level official to refrain from sending the documents. Odebrecht Employee 3 made three payments of 1 million Euros on behalf of Odebrecht in order to secure the deal. The contemplated fourth payment was never made.

73. Furthermore, in or about January 2016, after Lavo Jato and the investigations by United States and Swiss authorities were well-known to Odebrecht, employees and/or agents of the Company intentionally caused the destruction of physical encryption keys needed to access the MyWebDay system, which contained evidence relating to the bribery scheme. As a result of these actions, significant evidence from the MyWebDay system was rendered inaccessible.

ATTACHMENT C

CORPORATE COMPLIANCE PROGRAM

In order to address any deficiencies in its internal controls, compliance code, policies, and procedures regarding compliance with the Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), 15 U.S.C. §§ 78dd-1, *et seq.*, and other applicable anti-corruption laws, Odebrecht S.A. (the "Company") agrees to continue to conduct, in a manner consistent with all of its obligations under this Agreement, appropriate reviews of its existing internal controls, policies, and procedures.

Where necessary and appropriate, the Company agrees to adopt a new compliance program, or to modify its existing one, including internal controls, compliance policies, and procedures in order to ensure that it maintains: (a) an effective system of internal accounting controls designed to ensure the making and keeping of fair and accurate books, records, and accounts; and (b) a rigorous anti-corruption compliance program that incorporates relevant internal accounting controls, as well as policies and procedures designed to effectively detect and deter violations of the FCPA and other applicable anti-corruption laws. At a minimum, this should include, but not be limited to, the following elements to the extent they are not already part of the Company's existing internal controls, compliance code, policies, and procedures:

High-Level Commitment

1. The Company will ensure that its directors and senior management provide strong, explicit, and visible support and commitment to its corporate policy against violations of the anti-corruption laws and its compliance code.

Policies and Procedures

2. The Company will develop and promulgate a clearly articulated and visible corporate policy against violations of the FCPA and other applicable foreign law counterparts (collectively, the "anti-corruption laws,"), which policy shall be memorialized in a written compliance code.

3. The Company will develop and promulgate compliance policies and procedures designed to reduce the prospect of violations of the anti-corruption laws and the Company's compliance code, and the Company will take appropriate measures to encourage and support the observance of ethics and compliance policies and procedures against violation of the anti-corruption laws by personnel at all levels of the Company. These anti-corruption policies and procedures shall apply to all directors, officers, and employees and, where necessary and appropriate, outside parties acting on behalf of the Company in a foreign jurisdiction, including but not limited to, agents and intermediaries, consultants, representatives, distributors, teaming partners, contractors and suppliers, consortia, and joint venture partners (collectively, "agents and business partners"). The Company shall notify all employees that compliance with the policies and procedures is the duty of individuals at all levels of the company. Such policies and procedures shall address:

a. gifts;

b. hospitality, entertainment, and expenses;

c. customer travel;

d. political contributions;

e. charitable donations and sponsorships;

f. facilitation payments; and

g. solicitation and extortion.

4. The Company will ensure that it has a system of financial and accounting procedures, including a system of internal controls, reasonably designed to ensure the maintenance of fair and accurate books, records, and accounts. This system should be designed to provide reasonable assurances that:

a. transactions are executed in accordance with management's general or specific authorization;

b. transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles or any other criteria applicable to such statements, and to maintain accountability for assets;

c. access to assets is permitted only in accordance with management's general or specific authorization; and

d. the recorded accountability for assets is compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences.

Periodic Risk-Based Review

5. The Company will develop these compliance policies and procedures on the basis of a periodic risk assessment addressing the individual circumstances of the Company, in particular the foreign bribery risks facing the Company, including, but not limited to, its geographical organization, interactions with various types and levels of government officials, industrial sectors of operation, involvement in joint venture arrangements, importance of licenses

and permits in the Company's operations, degree of governmental oversight and inspection, and volume and importance of goods and personnel clearing through customs and immigration.

6. The Company shall review its anti-corruption compliance policies and procedures no less than annually and update them as appropriate to ensure their continued effectiveness, taking into account relevant developments in the field and evolving international and industry standards.

Proper Oversight and Independence

7. The Company will assign responsibility to one or more senior corporate executives of the Company for the implementation and oversight of the Company's anti-corruption compliance code, policies, and procedures. Such corporate official(s) shall have the authority to report directly to independent monitoring bodies, including internal audit, the Company's Board of Directors, or any appropriate committee of the Board of Directors, and shall have an adequate level of autonomy from management as well as sufficient resources and authority to maintain such autonomy.

Training and Guidance

8. The Company will implement mechanisms designed to ensure that its anti-corruption compliance code, policies, and procedures are effectively communicated to all directors, officers, employees, and, where necessary and appropriate, agents and business partners. These mechanisms shall include: (a) periodic training for all directors and officers, all employees in positions of leadership or trust, positions that require such training (e.g., internal audit, sales, legal, compliance, finance), or positions that otherwise pose a corruption risk to the Company, and, where necessary and appropriate, agents and business partners; and (b)

corresponding certifications by all such directors, officers, employees, agents, and business partners, certifying compliance with the training requirements.

9. The Company will maintain, or where necessary establish, an effective system for providing guidance and advice to directors, officers, employees, and, where necessary and appropriate, agents and business partners, on complying with the Company's anti-corruption compliance code, policies, and procedures, including when they need advice on an urgent basis or in any foreign jurisdiction in which the Company operates.

Internal Reporting and Investigation

10. The Company will maintain, or where necessary establish, an effective system for internal and, where possible, confidential reporting by, and protection of, directors, officers, employees, and, where appropriate, agents and business partners concerning violations of the anti-corruption laws or the Company's anti-corruption compliance code, policies, and procedures.

11. The Company will maintain, or where necessary establish, an effective and reliable process with sufficient resources for responding to, investigating, and documenting allegations of violations of the anti-corruption laws or the Company's anti-corruption compliance code, policies, and procedures.

Enforcement and Discipline

12. The Company will implement mechanisms designed to effectively enforce its compliance code, policies, and procedures, including appropriately incentivizing compliance and disciplining violations.

13. The Company will institute appropriate disciplinary procedures to address, among other things, violations of the anti-corruption laws and the Company's anti-corruption compliance code, policies, and procedures by the Company's directors, officers, and employees. Such procedures should be applied consistently and fairly, regardless of the position held by, or perceived importance of, the director, officer, or employee. The Company shall implement procedures to ensure that where misconduct is discovered, reasonable steps are taken to remedy the harm resulting from such misconduct, and to ensure that appropriate steps are taken to prevent further similar misconduct, including assessing the internal controls, compliance code, policies, and procedures and making modifications necessary to ensure the overall anti-corruption compliance program is effective.

Third-Party Relationships

14. The Company will institute appropriate risk-based due diligence and compliance requirements pertaining to the retention and oversight of all agents and business partners, including:

a. properly documented due diligence pertaining to the hiring and appropriate and regular oversight of agents and business partners;

b. informing agents and business partners of the Company's commitment to abiding by anti-corruption laws, and of the Company's anti-corruption compliance code, policies, and procedures; and

c. seeking a reciprocal commitment from agents and business partners.

15. Where necessary and appropriate, the Company will include standard provisions in agreements, contracts, and renewals thereof with all agents and business partners that are

reasonably calculated to prevent violations of the anti-corruption laws, which may, depending upon the circumstances, include: (a) anti-corruption representations and undertakings relating to compliance with the anti-corruption laws; (b) rights to conduct audits of the books and records of the agent or business partner to ensure compliance with the foregoing; and (c) rights to terminate an agent or business partner as a result of any breach of the anti-corruption laws, the Company's compliance code, policies, or procedures, or the representations and undertakings related to such matters.

Mergers and Acquisitions

16. The Company will develop and implement policies and procedures for mergers and acquisitions requiring that the Company conduct appropriate risk-based due diligence on potential new business entities, including appropriate FCPA and anti-corruption due diligence by legal, accounting, and compliance personnel.

17. The Company will ensure that the Company's compliance code, policies, and procedures regarding the anti-corruption laws apply as quickly as is practicable to newly acquired businesses or entities merged with the Company and will promptly:

a. train the directors, officers, employees, agents, and business partners consistent with Paragraph 8 above on the anti-corruption laws and the Company's compliance code, policies, and procedures regarding anti-corruption laws; and

b. where warranted, conduct an FCPA-specific audit of all newly acquired or merged businesses as quickly as practicable.

Monitoring and Testing

18. The Company will conduct periodic reviews and testing of its anti-corruption compliance code, policies, and procedures designed to evaluate and improve their effectiveness in preventing and detecting violations of anti-corruption laws and the Company's anti-corruption code, policies, and procedures, taking into account relevant developments in the field and evolving international and industry standards.

ATTACHMENT D

INDEPENDENT COMPLIANCE MONITOR

The duties and authority of the Independent Compliance Monitor (the "Monitor"), and the obligations of Odebrecht S.A. (the "Company"), on behalf of itself and its subsidiaries and affiliates, with respect to the Monitor and the United States Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section and the United States Attorney's Office for the Eastern District of New York (collectively the "Department"), are as described below:

1. The Company will retain the Monitor for a period of three years (the "Term of the Monitorship"), unless the early termination provision of Paragraph 1 of the Plea Agreement (the "Agreement") is triggered.

Monitor's Mandate

2. The Monitor's primary responsibility is to assess and monitor the Company's compliance with the terms of the Agreement, including the Corporate Compliance Program in Attachment C, so as to specifically address and reduce the risk of any recurrence of the Company's misconduct. During the Term of the Monitorship, the Monitor will evaluate, in the manner set forth below, the effectiveness of the internal accounting controls, record-keeping, and financial reporting policies and procedures of the Company as they relate to the Company's current and ongoing compliance with the FCPA and other applicable anti-corruption laws (collectively, the "anti-corruption laws") and take such reasonable steps as, in his or her view, may be necessary to fulfill the foregoing mandate (the "Mandate"). This Mandate shall include an assessment of the Board of Directors' and senior management's commitment to, and effective

implementation of, the corporate compliance program described in Attachment C of the Agreement.

Company's Obligations

3. The Company shall cooperate fully with the Monitor, and the Monitor shall have the authority to take such reasonable steps as, in his or her view, may be necessary to be fully informed about the Company's compliance program in accordance with the principles set forth herein and applicable law, including applicable data protection and labor laws and regulations. To that end, the Company shall: facilitate the Monitor's access to the Company's documents and resources; not limit such access, except as provided in Paragraphs 5-6; and provide guidance on applicable local law (such as relevant data protection and labor laws). The Company shall provide the Monitor with access to all information, documents, records, facilities, and employees, as reasonably requested by the Monitor, that fall within the scope of the Mandate of the Monitor under the Agreement. The Company shall use its best efforts to provide the Monitor with access to the Company's former employees and its third-party vendors, agents, and consultants.

4. Any disclosure by the Company to the Monitor concerning corrupt payments, false books and records, and internal accounting control failures shall not relieve the Company of any otherwise applicable obligation to truthfully disclose such matters to the Department, pursuant to the Agreement.

Withholding Access

5. The parties agree that no attorney-client relationship shall be formed between the Company and the Monitor. In the event that the Company seeks to withhold from the Monitor

access to information, documents, records, facilities, or current or former employees of the Company that may be subject to a claim of attorney-client privilege or to the attorney work-product doctrine, or where the Company reasonably believes production would otherwise be inconsistent with applicable law, the Company shall work cooperatively with the Monitor to resolve the matter to the satisfaction of the Monitor.

6. If the matter cannot be resolved, at the request of the Monitor, the Company shall promptly provide written notice to the Monitor and the Department. Such notice shall include a general description of the nature of the information, documents, records, facilities or current or former employees that are being withheld, as well as the legal basis for withholding access. The Department may then consider whether to make a further request for access to such information, documents, records, facilities, or employees.

Monitor's Coordination with the Company and Review Methodology

7. In carrying out the Mandate, to the extent appropriate under the circumstances, the Monitor should coordinate with Company personnel, including in-house counsel, compliance personnel, and internal auditors, on an ongoing basis. The Monitor may rely on the product of the Company's processes, such as the results of studies, reviews, sampling and testing methodologies, audits, and analyses conducted by or on behalf of the Company, as well as the Company's internal resources (e.g., legal, compliance, and internal audit), which can assist the Monitor in carrying out the Mandate through increased efficiency and Company-specific expertise, provided that the Monitor has confidence in the quality of those resources.

8. The Monitor's reviews should use a risk-based approach, and thus, the Monitor is not expected to conduct a comprehensive review of all business lines, all business activities, or

all markets. In carrying out the Mandate, the Monitor should consider, for instance, risks presented by: (a) the countries and industries in which the Company operates; (b) current and future business opportunities and transactions; (c) current and potential business partners, including third parties and joint ventures, and the business rationale for such relationships; (d) the Company's gifts, travel, and entertainment interactions with foreign officials; and (e) the Company's involvement with foreign officials, including the amount of foreign government regulation and oversight of the Company, such as licensing and permitting, and the Company's exposure to customs and immigration issues in conducting its business affairs.

9. In undertaking the reviews to carry out the Mandate, the Monitor shall formulate conclusions based on, among other things: (a) inspection of relevant documents, including the Company's current anti-corruption policies and procedures; (b) on-site observation of selected systems and procedures of the Company at sample sites, including internal accounting controls, record-keeping, and internal audit procedures; (c) meetings with, and interviews of, relevant current and, where appropriate, former directors, officers, employees, business partners, agents, and other persons at mutually convenient times and places; and (d) analyses, studies, and testing of the Company's compliance program.

Monitor's Written Work Plans

10. To carry out the Mandate, during the Term of the Monitorship, the Monitor shall conduct an initial review and prepare an initial report, followed by at least two follow-up reviews and reports as described in Paragraphs 16-19 below. With respect to the initial report, after consultation with the Company and the Department, the Monitor shall prepare the first written work plan within 60 calendar days of being retained, and the Company and the Department shall

provide comments within 30 calendar days after receipt of the written work plan. With respect to each follow-up report, after consultation with the Company and the Department, the Monitor shall prepare a written work plan at least 30 calendar days prior to commencing a review, and the Company and the Department shall provide comments within 20 calendar days after receipt of the written work plan. Any disputes between the Company and the Monitor with respect to any written work plan shall be decided by the Department in its sole discretion.

11. All written work plans shall identify with reasonable specificity the activities the Monitor plans to undertake in execution of the Mandate, including a written request for documents. The Monitor's work plan for the initial review shall include such steps as are reasonably necessary to conduct an effective initial review in accordance with the Mandate, including by developing an understanding, to the extent the Monitor deems appropriate, of the facts and circumstances surrounding any violations that may have occurred before the date of the Agreement. In developing such understanding the Monitor is to rely to the extent possible on available information and documents provided by the Company. It is not intended that the Monitor will conduct his or her own inquiry into the historical events that gave rise to the Agreement.

Initial Review

12. The initial review shall commence no later than 120 calendar days from the date of the engagement of the Monitor (unless otherwise agreed by the Company, the Monitor, and the Department). The Monitor shall issue a written report within 150 calendar days of commencing the initial review, setting forth the Monitor's assessment and, if necessary, making recommendations reasonably designed to improve the effectiveness of the Company's program

for ensuring compliance with the anti-corruption laws. The Monitor should consult with the Company concerning his or her findings and recommendations on an ongoing basis and should consider the Company's comments and input to the extent the Monitor deems appropriate. The Monitor may also choose to share a draft of his or her reports with the Company prior to finalizing them. The Monitor's reports need not recite or describe comprehensively the Company's history or compliance policies, procedures and practices, but rather may focus on those areas with respect to which the Monitor wishes to make recommendations, if any, for improvement or which the Monitor otherwise concludes merit particular attention. The Monitor shall provide the report to the Board of Directors of the Company and contemporaneously transmit copies to the Deputy Chief – FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice, at 1400 New York Avenue N.W., Bond Building, Eleventh Floor, Washington, D.C. 20005 and Chief, Business and Securities Fraud Section, United States Attorney's Office, Eastern District of New York, 271-A Cadman Plaza East, Brooklyn, New York 11201. After consultation with the Company, the Monitor may extend the time period for issuance of the initial report for a brief period of time with prior written approval of the Department.

13. Within 150 calendar days after receiving the Monitor's initial report, the Company shall adopt and implement all recommendations in the report, unless, within 60 calendar days of receiving the report, the Company notifies in writing the Monitor and the Department of any recommendations that the Company considers unduly burdensome, inconsistent with applicable law or regulation, impractical, excessively expensive, or otherwise inadvisable. With respect to any such recommendation, the Company need not adopt that

recommendation within the 150 calendar days of receiving the report but shall propose in writing to the Monitor and the Department an alternative policy, procedure or system designed to achieve the same objective or purpose. As to any recommendation on which the Company and the Monitor do not agree, such parties shall attempt in good faith to reach an agreement within 45 calendar days after the Company serves the written notice.

14. In the event the Company and the Monitor are unable to agree on an acceptable alternative proposal, the Company shall promptly consult with the Department. The Department may consider the Monitor's recommendation and the Company's reasons for not adopting the recommendation in determining whether the Company has fully complied with its obligations under the Agreement. Pending such determination, the Company shall not be required to implement any contested recommendation(s).

15. With respect to any recommendation that the Monitor determines cannot reasonably be implemented within 150 calendar days after receiving the report, the Monitor may extend the time period for implementation with prior written approval of the Department.

Follow-Up Reviews

16. A follow-up review shall commence no later than 180 calendar days after the issuance of the initial report (unless otherwise agreed by the Company, the Monitor and the Department). The Monitor shall issue a written follow-up report within 120 calendar days of commencing the follow-up review, setting forth the Monitor's assessment and, if necessary, making recommendations in the same fashion as set forth in Paragraph 12 with respect to the initial review. After consultation with the Company, the Monitor may extend the time period for

issuance of the follow-up report for a brief period of time with prior written approval of the Department.

17. Within 120 calendar days after receiving the Monitor's follow-up report, the Company shall adopt and implement all recommendations in the report, unless, within 30 calendar days after receiving the report, the Company notifies in writing the Monitor and the Department concerning any recommendations that the Company considers unduly burdensome, inconsistent with applicable law or regulation, impractical, excessively expensive, or otherwise inadvisable. With respect to any such recommendation, the Company need not adopt that recommendation within the 120 calendar days of receiving the report but shall propose in writing to the Monitor and the Department an alternative policy, procedure, or system designed to achieve the same objective or purpose. As to any recommendation on which the Company and the Monitor do not agree, such parties shall attempt in good faith to reach an agreement within 30 calendar days after the Company serves the written notice.

18. In the event the Company and the Monitor are unable to agree on an acceptable alternative proposal, the Company shall promptly consult with the Department. The Department may consider the Monitor's recommendation and the Company's reasons for not adopting the recommendation in determining whether the Company has fully complied with its obligations under the Agreement. Pending such determination, the Company shall not be required to implement any contested recommendation(s). With respect to any recommendation that the Monitor determines cannot reasonably be implemented within 120 calendar days after receiving the report, the Monitor may extend the time period for implementation with prior written approval of the Department.

19. The Monitor shall undertake a second follow-up review not later than 150 calendar days after the issuance of the first follow-up report. The Monitor shall issue a second follow-up report within 120 days of commencing the review, and recommendations shall follow the same procedures described in Paragraphs 16-18. No later than 60 days before the end of the Term, the Monitor shall submit to the Department a final written report ("Certification Report"), setting forth an overview of the Company's remediation efforts to date, including the implementation status of the Monitor's recommendations, and an assessment of the sustainability of the Company's remediation efforts. No later than 30 days before the end of the Term, the Monitor shall certify whether the Company's compliance program, including its policies and procedures, is reasonably designed and implemented to prevent and detect violations of the anti-corruption laws.

Monitor's Discovery of Potential or Actual Misconduct

20. (a) Except as set forth below in sub-paragraphs (b), (c) and (d), should the Monitor discover during the course of his or her engagement that:

- improper payments or anything else of value may have been offered, promised, made, or authorized by any entity or person within the Company or any entity or person working, directly or indirectly, for or on behalf of the Company; or
- the Company may have maintained false books, records or accounts; or

(collectively, "Potential Misconduct"), the Monitor shall immediately report the Potential Misconduct to the Company's General Counsel, Chief Compliance Officer, and/or Audit Committee for further action, unless the Potential Misconduct was already so disclosed. The

Monitor also may report Potential Misconduct to the Department at any time, and shall report Potential Misconduct to the Department when it requests the information.

(b) In some instances, the Monitor should immediately report Potential Misconduct directly to the Department and not to the Company. The presence of any of the following factors militates in favor of reporting Potential Misconduct directly to the Department and not to the Company, namely, where the Potential Misconduct: (1) poses a risk to public health or safety or the environment; (2) involves senior management of the Company; (3) involves obstruction of justice; or (4) otherwise poses a substantial risk of harm.

(c) If the Monitor believes that any Potential Misconduct actually occurred or may constitute a criminal or regulatory violation ("Actual Misconduct"), the Monitor shall immediately report the Actual Misconduct to the Department. When the Monitor discovers Actual Misconduct, the Monitor shall disclose the Actual Misconduct solely to the Department, and, in such cases, disclosure of the Actual Misconduct to the General Counsel, Chief Compliance Officer, and/or the Audit Committee of the Company should occur as the Department and the Monitor deem appropriate under the circumstances.

(d) The Monitor shall address in his or her reports the appropriateness of the Company's response to disclosed Potential Misconduct or Actual Misconduct, whether previously disclosed to the Department or not. Further, if the Company or any entity or person working directly or indirectly for or on behalf of the Company withholds information necessary for the performance of the Monitor's responsibilities and the Monitor believes that such withholding is without just cause, the Monitor shall also immediately disclose that fact to the

Department and address the Company's failure to disclose the necessary information in his or her reports.

(e) The Company nor anyone acting on its behalf shall take any action to retaliate against the Monitor for any such disclosures or for any other reason.

Meetings During Pendency of Monitorship

21. The Monitor shall meet with the Department within 30 calendar days after providing each report to the Department to discuss the report, to be followed by a meeting between the Department, the Monitor, and the Company.

22. At least annually, and more frequently if appropriate, representatives from the Company and the Department will meet together to discuss the monitorship and any suggestions, comments, or improvements the Company may wish to discuss with or propose to the Department, including with respect to the scope or costs of the monitorship.

Contemplated Confidentiality of Monitor's Reports

23. The reports will likely include proprietary, financial, confidential, and competitive business information. Moreover, public disclosure of the reports could discourage cooperation, or impede pending or potential government investigations and thus undermine the objectives of the monitorship. For these reasons, among others, the reports and the contents thereof are intended to remain and shall remain non-public, except as otherwise agreed to by the parties in writing, or except to the extent that the Department determines in its sole discretion that disclosure would be in furtherance of the Department's discharge of its duties and responsibilities or is otherwise required by law.

ANEXO 4

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA Nº 28759

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA POR LA CUAL SE CREA LA COMISIÓN NACIONAL PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL EX PARLAMENTARIO FERNANDO LEÓN DE VIVERO

Artículo 1º .- Objeto de la Resolución Legislativa
Constitúyese una Comisión Nacional encargada de organizar los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del ilustre político Don Fernando León de Vivero.

Artículo 2º.- De la conformación de la Comisión
La Comisión Nacional estará conformada por:

- Un representante del Congreso de la República, quien la preside.
- Un representante del Partido Aprista Peruano.
- Un representante del Concejo Provincial de Ica.
- Un representante del Gobierno Regional de Ica.
- Un representante de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
- Un familiar de Don Fernando León de Vivero.

Artículo 3º.- Atribuciones de la Comisión
La Comisión Nacional realizará las coordinaciones necesarias con las entidades públicas y privadas para la organización y ejecución de los actos que programe.

Artículo 4º.- Apoyo del Congreso
El Congreso de la República queda encargado de brindar el apoyo necesario para la ejecución del Programa Anual Conmemorativo.

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Lima, 12 de junio de 2006

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

10548

LEY Nº 28760

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 147º, 152º Y 200º DEL CÓDIGO PENAL Y EL ARTÍCULO 136º DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SEÑALA LAS NORMAS A LAS QUE SE SUJETARÁN LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN EL CASO DE SENTENCIADOS POR DELITO DE SECUESTRO

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Apruébanse las siguientes disposiciones modificatorias en materia penal:

a) Modifícanse los artículos 147º, 152º y 200º del Código Penal, cuyo texto en lo sucesivo será el siguiente:

"Artículo 147º.- Sustracción de menor
El que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
La misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, aún cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad.

Artículo 152º.- Secuestro
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.
La pena será no menor de treinta años cuando:

1. Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud del agraviado.
2. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado.
3. El agraviado o el agente es funcionario, servidor público o representante diplomático.
4. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado.
5. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las personas referidas en los incisos 3 y 4 precedentes.
6. Tiene por objeto obligar a un funcionario o servidor público a poner en libertad a un detenido o a una autoridad a conceder exigencias ilegales.
7. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una agrupación criminal o a una tercera persona para que preste al agente del delito ayuda económica o su concurso bajo cualquier modalidad.
8. Se comete para obtener tejidos somáticos de la víctima, sin grave daño físico o mental.

La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.
La pena será de cadena perpetua cuando el agraviado es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o discapacitado; así como cuando la

víctima resulte con daños en el cuerpo o en su salud física o mental, o muera durante el secuestro, o a consecuencia de dicho acto.

Artículo 200º.- Extorsión
El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.
La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando el secuestro:

1. Dura más de cinco días.
2. Se emplea crueldad contra el rehén.
3. El agraviado o el agente ejerce función pública o privada o es representante diplomático.
4. El rehén adolece de enfermedad.
5. Es cometido por dos o más personas.

La pena será de cadena perpetua si el rehén es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o discapacitado o si la víctima sufre lesiones en su integridad física o mental o si fallece a consecuencia de dicho acto."

b) Modifícase el artículo 136º del Código de Procedimientos Penales, cuyo texto en lo sucesivo será el siguiente:

"**Artículo 136º.- Efectos de la confesión**
La confesión del inculpado corroborada con prueba, releva al juez de practicar las diligencias que no sean indispensables, pudiendo dar por concluida la investigación siempre que ello no perjudique a otros inculpados o que no pretenda la impunidad para otro, respecto del cual existan sospechas de culpabilidad.
La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal, salvo que se trate de los delitos de secuestro y extorsión, previstos en los artículos 152º y 200º del Código Penal, respectivamente, en cuyo caso no opera la reducción."

Artículo 2º.- Improcedencia del indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia
No procede el indulto, ni la conmutación de pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos.

Artículo 3º.- Regulación de beneficios penitenciarios
Los beneficios penitenciarios para los sentenciados por los delitos de secuestro y extorsión se regularán de conformidad con lo previsto en los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto Legislativo Nº 927.

Artículo 4º.- Derogatoria
Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de junio del año dos mil seis.

DAVID WAISMAN RJAVINSTHI
Segundo Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho de la Presidencia de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros

10549

PODER EJECUTIVO

P C M

Autorizan viaje del Presidente del Consejo Nacional de Descentralización a Uruguay para participar en reunión relativa al proceso de integración sudamericano

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 165-2006-PCM

Lima, 12 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 079-2006-RE se designó al señor Luis Thaís Díaz para que, en representación del gobierno peruano, integre la "Comisión

CONVENIOS INTERNACIONALES

COMUNICADO

"Se hace de conocimiento que **aún no está en vigencia** el "Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de la República de Colombia Modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición, firmado el 18 de junio de 1911", suscrito el 22 de octubre de 2004, **publicado por error involuntario en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el día 11 de junio de 2006, página 321292".**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

10498

ANEXO 5

PRONUNCIAMIENTO N°01/DP/2018

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REITERA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PEDIDO DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE QUE SUSTENTÓ EL INDULTO Y DERECHO DE GRACIA AL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Con fecha de 04 de enero del presente año mediante el oficio N° 001-2018-DP/ADHPD la Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) su pedido de remisión de copias certificadas o fedateadas del expediente y el acta de sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales que sirvieron de sustento al indulto y derecho de gracia concedidos al expresidente de la República.

Como se recordará con fecha 27 de diciembre del 2017, mediante el oficio N° 119-2017-DP/ADHPD la institución solicitó al doctor Juan Falconí Gálvez, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales la remisión de los citados documentos, sin que hasta la fecha ello haya ocurrido.

En la última comunicación cursada, se recuerda al citado Ministerio su deber de cumplir con el requerimiento en el plazo establecido en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Teniendo en cuenta sus potestades constitucionales, la Defensoría del Pueblo viene elaborando un informe sobre las gracias presidenciales otorgadas al expresidente Alberto Fujimori Fujimori, el cual será hecho público no más allá del 24 del presente mes.

Lima, 10 de enero de 2018

Freiburg, Erlangen/Nürnberg, 25 de enero de 2018

Honorable juez
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presente.-

Por medio de esta comunicación queremos transmitir al tribunal que usted preside que la señora Doctora Laura Clérico, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y Lehrbeauftrage en Derechos Humanos y Constitucional Comparado en la Universidad de Erlangen/Nürnberg, se adhiere y suscribe en su totalidad el documento presentado en calidad de *amici curiae* por Jan-Michel Simon y César Bazán Seminario, el 15 de enero de 2018 y puesto en conocimiento de las partes, según se nos comunicó mediante la Nota del 19 de enero de 2018, CDH-11.528/648 (Barrios Altos) y CDH-11.045/356 Cantuta, supervisión de cumplimiento de sentencia.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

César Bazán Seminario

Jan-Michel Simon

Laura Clérico